

Carta al Comité Ejecutivo Central del MOIR

■ Martha Bermúdez ■ Francisco Cabrera ■ Vladimir Castañeda
■ Alfonso Hernández ■ Alejandro Torres



Bogotá, D.C., Octubre de 2003

CARTA AL COMITÉ EJECUTIVO CENTRAL DEL MOIR

Bogotá, octubre 8 de 2003

Respetados compañeros:

El pasado mes de junio, el gobierno de Álvaro Uribe liquidó Telecom y desvertebró el ISS y Ecopetrol, medidas esenciales de la maquinación del Fondo Monetario Internacional, FMI, para convertir en mero negocio de los monopolistas las telecomunicaciones, el petróleo y la salud de los colombianos. Al proceder de semejante manera también arrasó los derechos de los trabajadores: quienes laboraban en Telecom fueron lanzados a la calle de manera intempestiva y brutal; los empleados de la nueva empresa, con fachada de pública, fueron enganchados sin derechos ni garantías; en el ISS se generalizó el contrato a término fijo y se recortaron nuevamente las prestaciones sociales, y en Ecopetrol está a punto de imponerse el contrapliego que erosiona la USO y la estabilidad laboral. Ya antes de junio, la administración Uribe había cerrado el INAT, el Incora, el Inpa, el DRI, Carbocol y el Inurbe, entre otros, y despedido a miles de funcionarios.

La revista *Semana* señaló que el gobierno “se enfrenta a los sindicatos más poderosos del país y la reacción de los trabajadores ha sido más débil de lo que se esperaba” y preguntó: “¿Se acaba el movimiento sindical colombiano?”¹ El comentario dio en el clavo, pues lo más alarmante de todo fue que ni siquiera se intentó resistir a tan perversa embestida. La dirigencia se limitó a convocar un paro nacional para una fecha más adecuada a una conmemoración de los atropellos que a enfrentarlos. Fue uno más de esos paros que ocasionalmente convoca, pero que nunca prepara, porque no le interesa que lleguen a ser más que un desfile.

Es dable incluso pensar que dicha actitud claudicante envalentonó al gobierno, como lo aseguró la revista *Cambio*, que tiene por qué saberlo:

“Los temores del Presidente en torno a una reacción popular que fuera en contra de las medidas, se disiparon rápidamente con la aceptación que tuvieron las medidas en torno a Telecom, una razón que explicó los afanes de finales de junio, pues el gobierno se dio cuenta de que podía avanzar más de lo que había pensado.”²

¹ *Semana, Estigmatizado, anacrónico y debilitado el sindicalismo atraviesa la peor crisis en 30 años y no sabe como salir de ella*, 29 de junio de 2003.

² *Cambio, El primer round*, 30 de junio de 2003.

La mansedumbre de los concertadores sale cara a las bases. Ahora el régimen, que no se ablanda con las exhortaciones a conciliar, prepara otro paquete contra la carrera administrativa y el sistema de contratación, nuevas subastas del patrimonio nacional y mandobles a la masa empobrecida.

Quiérase o no, ha de abrirse el debate sobre esta crisis inocultable de las organizaciones obreras. ¡Cómo no reconocer la necesidad de discutir a fondo las condiciones y actitudes que han llevado al obrerismo a tal postración! ¡Cómo no estudiar y adoptar políticas que tiendan a reactivar la lucha! ¿Qué clase de partido obrero sería aquél que no se tome con la mayor seriedad las lecciones de estos reveses? El tema interesa a todo trabajador consciente y, por supuesto, a todo militante. Por ello, se equivocan quienes pretenden con formalismos mantener enclaustrada esta polémica. Las exigencias de la necesaria disciplina no amparan los yerros en materia tan vital ni debe permitirse que las normas del centralismo democrático se utilicen para impedir que se ventilen los problemas fundamentales. ¡Que no se trueque en obediencia la lealtad a la causa!

En los reducidísimos espacios en los que se nos ha permitido, los firmantes de esta carta hemos planteando nuestro desacuerdo con la política aprobada en la Conferencia Nacional del Partido realizada en La Mesa de los Santos, consistente en contemporizar con los dirigentes sindicales que entregan las causas obreras y patrióticas. La propia actitud del MOIR en Ecopetrol ahonda nuestras discrepancias con el Comité Ejecutivo. Por ello, en este documento queremos dejar consignadas por escrito —*verba volant, scripta manent*— nuestras opiniones a lo largo de este debate. Por otra parte, estamos convencidos de que es más provechoso al desarrollo político del Partido que se conozcan a cabalidad los puntos de vista divergentes, en vez de que el grueso de la militancia se entere únicamente de los ataques que nos hace la Dirección. Corremos, pues, los riesgos que entraña el expresar nuestras convicciones, que haremos públicas en el momento adecuado.

I

OFENSIVA IMPERIALISTA Y SUPEREXPLOTACIÓN DE LA MANO DE OBRA

Con los nombres de *apertura económica*, *globalización* o *neoliberalismo* se ha bautizado la acometida imperialista que toma fuerza desde el comienzo de los años noventa. El colapso de la URSS despejó el campo a la hegemonía norteamericana y con prédicas y chantajes de libre comercio se encarna la guerra por el control del mercado mundial. Un puñado de financistas aprieta el dogal de la usura a tal punto que sofoca Estados, empresas y habitantes en los países ricos, mientras estrangula a aquéllos de los países pobres. La exportación de capitales creció con frenesí casi hasta el final de la década anterior, para luego caer empujada por la crisis; los monopolios se fusionan y chocan con virulencia inusitada; los consorcios gringos, europeos y nipones disputan en territorio propio y ajeno. Todos pugnan por adueñarse de las materias primas, los mercados de bienes y servicios y las empresas públicas y privadas de los países del Tercer Mundo. El capital se concentra; la miseria prolifera.

El Fondo Monetario, el Banco Mundial, BM, y la Organización Mundial del Comercio, OMC, a partir de las órdenes emanadas primordialmente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, fuerzan a las naciones a aceptar el conjunto de reformas de la globalización. En esencia, se trata de garantizar la rentabilidad a los grandes capitales. Los Estados deben dedicar todos sus esfuerzos a abonar una deuda impagable, fabuloso negocio que devora impuestos crecientes y engulle recursos de la subasta de entidades públicas y de recortes de gastos de toda índole. Las monedas, las

acciones, los títulos de deuda pública constituyen minas de enriquecimiento rápido para los especuladores y de ruina para millones de seres. Los países deben abrir sus mercados a los bienes y servicios de las multinacionales, cuyas ganancias tambalean a causa de la superproducción. La enseñanza y la salud también pasan a ser sólo negocios de los acaudalados.

Los aperturistas consideran palabra sagrada el derecho de propiedad y la libertad de los piratas del gran capital internacional; únicamente permiten discutir la mejor manera de llevar a cabo sus designios. Maquillan y allanan el camino al saqueo hablando de la democracia participativa; de la resolución pacífica de los conflictos y de la inclusión de los excluidos; de la descentralización y del *empoderamiento* de las comunidades locales y de combatir la corrupción. Cuando lanzan a millones de seres a la indigencia, pregonan solidaridad y protección a los más pobres. Culpan de la pauperización, no a los grandes financistas transnacionales, a los que eximen de impuestos y contribuciones, sino a los asalariados y a las capas medias, de cuyos bolsillos exprimen los recursos con los que posan de caritativos.

Para vencer a sus contrincantes en la arrebatiña por la riqueza del orbe, los monopolios envilecen ansiosamente las remuneraciones, arma definitiva en la guerra económica. Como lo señaló Francisco Mosquera: “Sin mano de obra barata no habrá neoliberalismo que funcione”.³ Por ello, la orden del día de los potentados es abatir la resistencia obrera, eliminando derechos como la estabilidad laboral, y destruir los sindicatos que no se avengan a sus ambiciones; requieren un tipo de sindicalismo que no sea radical, más dócil y concertador. Por el contrario, para quienes bregamos contra la sojuzgación, la hora exige la más decidida defensa de los intereses proletarios y nacionales.

II

“NUEVO” SINDICALISMO

No es casual que cuando se les declara la guerra sin cuartel a los asalariados, en las filas de éstos tome fuerza una tendencia que clama porque cese la lucha de clases, por “un sindicalismo *propositivo* y no contestatario” y que suspira por el “Estado social de derecho”. Repasemos algunos de los planteamientos centrales de esta corriente nociva.

Remiendos para una nación desvencijada

Uno de los brazos de ese riachuelo, el Frente Social y Político, FSP, surgido en el Comando Nacional Unitario por propuesta de la Junta Nacional de la CUT, de agosto de 1998, ha planteado enfrentar el “modelo de desarrollo” y procurar “la paz con justicia social” propulsando, entre otras, las siguientes “concepciones básicas”:

- Reducir la pobreza y la exclusión económica y social.
- Hacer valer el principio constitucional del Estado Social de Derecho.
- Con el fin de “contrarrestar en mayor grado y dentro de los límites del sistema económico vigente, las profundas desigualdades y la exclusión del modelo neoliberal”, desarrollar, de

³ Francisco Mosquera, *Resistencia Civil*, Editor Tribuna Roja, Bogotá, 1995, pág. 492.

acuerdo con el artículo 333 de la Constitución Política, un “modelo alternativo de economía nacional de carácter plural o mixto”, compuesto por un sector público, uno de economía capitalista en el cual el “libre mercado” y la rentabilidad se subordinen “a los intereses del desarrollo nacional y del bien común general”, y uno de economía solidaria.

- Planificar la macroeconomía con “carácter participativo” sobre la base de “un protagonismo equilateral de todos los actores económicos y sociales”.
- Orientar el ahorro interno hacia las exportaciones y a una “participación equilateral (...) en el mercado mundial”.
- Canalizar el endeudamiento externo y la inversión extranjera hacia el “crecimiento interno autónomo”, sin comprometer “la inversión social y el desarrollo integral”.
- Democratizar la vida nacional haciendo que las “organizaciones sociales” participen en las instancias donde se definen las políticas, en las juntas directivas de los organismos estatales, en la gestión, administración y propiedad de las empresas, y en los procesos de paz.

En lo referente al Estado y al régimen político agrega:

- Que “la reforma política constituye el problema central de la sociedad colombiana” y debe enfocarse a resolver el conflicto armado y los desequilibrios sociales, reforzar la participación y buscar el concurso de los distintos “proyectos históricos que configuran la disputa por el poder en Colombia”, para lo cual deberían aprovecharse las posibilidades que brindarían las “autonomías territoriales”.
- Construir “un régimen político incluyente e integrador”, que se caracterice por tolerar la oposición con base en un “consenso político fundacional” sobre la naturaleza del Estado y el disenso en cuanto a la función del gobierno. Las minorías, en su papel opositor y para preservar sus intereses, los de la nación y los del “pacto político”, deben participar en los “espacios constituidos”; esto es, “cohabitar” en el control constitucional, las políticas monetaria y exterior, los organismos de control. Finalmente, construir tales reformas por medio de “un nuevo proceso constituyente” que les dé permanencia a “los propósitos nacionales fundacionales”.

Sobre la moral:

- Construir una ética pública, lo cual no se contradice con la defensa de los legítimos derechos particulares.
- Superar las divisiones, los partidismos, es decir, “las identidades tribales”. Dejar de pensar y actuar en política con la lógica de “amigo-enemigo”, que han reproducido las organizaciones populares y de izquierda. Por el contrario: “estimular, promover, defender el pluralismo”, erigido sobre los “consensos básicos”.
- Oponer la “participación” a la corrupción, el clientelismo y las “empresas electorales”.
- Reconocer como “legítima” la lucha por el poder pero no con la visión autoritaria de “derecha e izquierda”, sino “acortándola”, “ubicándola” en un terreno común aceptado por las partes.⁴

El programa del FSP es característico de las tendencias a las que nos estamos refiriendo, lo cual nos excusa de tratar en detalle cada una de las variantes anteriores o posteriores, como la Alianza Democrática M-19 o el Polo Democrático Independiente. Las orientaciones económicas se dirigen no

⁴ *Documentos para el debate*, Frente Social y Político, mayo de 1999.

a erradicar la causa de los desastres que vive el país sino a paliar sus efectos más escandalosos; y la prédica de la tolerancia, la reconciliación, el amor entre víctimas y victimarios se presenta como bálsamo curalotodo. El programa político se enruta a darle un barniz “participativo” a un régimen cuya esencia es la opresión, y un discurso moralizante propaga que las dolamas sociales se originan en las fechorías violatorias de la ley y no en la consagración constitucional de la fechoría. Las teorías del FSP no necesitaron ser creadas por sus líderes, quienes pudieron simple y llanamente tomarlas de los textos del Banco Mundial, a cuya difusión y puesta en práctica sirven.

Carlos Rodríguez, actual presidente de la CUT, quien le lleva caña al mismo trapiche, manifestó al diario *La República* sus puntos de vista sobre el rumbo que necesita el país. Luego de señalar que “en la actual CUT todos somos dirigentes sindicales consecuentes”, se expresó así sobre las relaciones del sindicalismo con el inquilino de la Casa de Nariño:

“Nosotros necesitamos relaciones fluidas y respetuosas con cualquier gobierno. El objeto siempre será encontrar soluciones a los problemas de los trabajadores. A la actual administración ya le hemos planteado la urgencia de un gran acuerdo nacional. Estamos dispuestos a contribuir en la disminución de la tasa de desempleo y en la reorientación de la política económica. Esto se logra sólo con la participación del gobierno, de los empresarios y de los trabajadores por la vía civilista y democrática”.⁵

Con el cuento de “contribuir en la disminución de la tasa de desempleo” se vienen congelando salarios y prestaciones. ¿Qué culpa pueden tener los obreros en el desempleo?

Para hacer realidad su versión rediviva del “pacto social” propone “un plan de empleo de emergencia y una renegociación con la banca mundial para aplazar dos años el pago del servicio de la deuda y dedicar recursos a la reactivación de la economía”.⁶ Recientemente, en su informe a la XXXIV junta nacional de la CUT, propuso darle renovado impulso al plan de ocupación craneado con las otras centrales y cuyos aspectos básicos son los siguientes:

Frente a las políticas neoliberales que retrotraen a los trabajadores a las épocas del llamado capitalismo salvaje, pugnar por que no se excluyan “otros planteamientos teóricos y otras alternativas de política, como los inmersos en los estados de bienestar —estados Keynesianos— y del Estado Social de Derecho que orienta nuestro ordenamiento constitucional”; establecer un “Modelo Alternativo de Desarrollo”, en el que rija en regla el Estado Social de Derecho, proclamado en “nuestra Constitución Política”.

En cuanto a la economía abogó por: un “Modelo de Economía Mixta y Plural”, dotado “con la libertad económica establecida en la Constitución, donde coexistan armónicamente las propiedades: Pública, asumida por el Estado para las actividades estratégicas del desarrollo nacional; Privada con prevalencia de la libertad económica, la competitividad y la rentabilidad, pero subordinada al bien común; y la Solidaria con propiedad social de los medios de producción, el trabajo asociado y la autogestión”. Que la macroeconomía ha de tener un “alcance Estratégico y ser Participativa, que opere sobre la base de un equilibrio equilateral (sic) de todos los sectores económicos y sociales”.

En lo inmediato, que se financien “proyectos intensivos en la utilización de mano de obra. Tales como la recuperación de la malla vial de las ciudades, la rectificación de la autopista a la Costa Atlántica, a la Pacífica, la vía Ibagué–Armenia, y otros. Lo mismo que en la financiación de actividades

⁵ *La República*, 26 de abril de 2003.

⁶ *Ibidem*.

productivas, principalmente PYME y campesinas, a través de entidades de redescuento, con tasas blandas de interés (...) Adoptar la jornada laboral de 40 horas semanales y suprimir las horas extras, sin que esto signifique reducción salarial. Agenciar ante los organismos financieros internacionales y banca multilateral el alivio o renegociación de la deuda pública externa como un aporte al proceso de paz. Estímulo decisivo al sector de la construcción, particularmente a la vivienda de interés social"; y crear un "Fondo Nacional para la Generación de Empleo, el cual será manejado entre el Gobierno y los Trabajadores", y que se financiaría no reduciéndole las ganancias al capital sino cargándoles nuevos impuestos a los asalariados.⁷

Como se puede ver, las propuestas coincidentes del FSP y del presidente de la CUT, no difieren gran cosa de las oficiales. No formulan una defensa de la producción nacional, que permita superar la crisis, no rechazan la especulación con la deuda externa, la cual constituye la médula de la quiebra fiscal. Hacen el juego a la tesis de que la creación de empleo y la llamada política social se deben adelantar sobre la base de la mengua de los salarios. Según esto, no son la usura financiera, que desfalca el erario y acogota las empresas, ni la competencia imperialista las que arruinan la producción nacional, sino los salarios. Lo anterior constituye apenas una muestra de este miserable engaño que no puede sino conducir al envilecimiento ideológico de las masas y a entregarlas con las manos atadas al despojo de sus enemigos. No obstante, el Partido no se ha tomado la molestia de desenmascarar la felonía, adoptando una actitud laxa frente a la necesaria disputa por la mente de los trabajadores, disputa a la que tienen que vivir siempre atentos los verdaderos revolucionarios.

Por el contrario, con respecto al programa del FSP, el Moir se propuso traer por los cabellos "importantes coincidencias" en cuanto a la defensa de la soberanía, los derechos de los trabajadores y la lucha contra el neoliberalismo⁸. Es decir, lo opuesto a lo plasmado en el proyecto programático en discusión. Al final de cuentas, como ninguna de esas "importantes coincidencias", que sólo existían en los cerebros de los jefes moiristas, fue tomada en cuenta el 12 de abril de 2000, para el lanzamiento oficial del FSP, el Partido debió dirigir al organizador del evento una esquela excusándose de asistir. Sobre lo anterior versó una de las primeras y agudas discusiones que los firmantes sostuvimos con la dirección partidaria.

El "nuevo" sindicalismo y la lucha reivindicativa

Durante las deliberaciones que dieron nacimiento a la Constitución de 1991, que sentara las bases jurídicas de la *apertura*, quienes llegaron a ellas como supuestos representantes del obrerismo habían empezado a difundir los nuevos lineamientos sindicales que correspondían a los planteados por Gaviria para toda la sociedad. Angelino Garzón, ex secretario general de la CUT, los dio a conocer como sus "sueños", "ideales" y "nuevas concepciones" frente a "los otros interlocutores" del mundo del trabajo: los empresarios y el Estado. Tales "sueños", afirmó, eran los mismos

⁷ Comando Nacional Unitario, CUT, CGTD, CTC, CPC, *Propuestas de las centrales sindicales para la generación de empleos dignos y productivos*, Bogotá, mayo de 2003.

⁸ *Tribuna Roja*, n.º 80, *Sin la resistencia antimperialista como eje central no podrá construirse verdadera alternativa popular*, 27 de abril de 2000.

“replanteamientos” que se estaban haciendo muchos sindicalistas, y que “hemos denominado sindicalismo sociopolítico”.⁹

Señaló que ya no creía en “las teorías de vanguardia sociales o políticas”, sino en la “convivencia pluralista, tolerante, renovadora, solidaria y democrática”; que el Estado debía contribuir a que obreros y empresarios superaran “la vieja concepción de dos enemigos, de hacer de las diferencias sociales y de intereses algo totalmente antagónico”; que los proletarios tendrían que dejar de ver a las empresas “como simples objetos”, y más bien incidir “positivamente” en su productividad, en la seguridad industrial, en los cambios tecnológicos, en la eficiencia administrativa y en el interés por los mercados, mediante mecanismos de concertación que les permitan “participar en formas de propiedad, cogestión y en las utilidades de las empresas, en otras palabras, poder ejercer la democracia participativa en la vida económica del país”.¹⁰

Con lo anterior, se superaría la confrontación que lleva a los sindicatos a no concertar, se lograría desarrollar el autocontrol sindical y un papel democrático y responsable en las empresas y en la sociedad. Ésta, a su vez, se encargaría de “exigirle (sic) seriedad y voluntad al gobierno, a los empresarios y a los sindicatos en las relaciones laborales”. Para rematar, alegó que los trabajadores, al igual que los empresarios, con su desconfianza, egoísmo y radicalidad, llevan sus relaciones con base en el conflicto y el antagonismo social.¹¹

El mismo Garzón, junto con otros assembleístas, entre ellos Tulio Cuevas y Guillermo Perry (fichas de Álvaro Gómez y Horacio Serpa, respectivamente, quienes con Antonio Navarro —el jefe de Garzón— presidían la Asamblea) suscribió una ponencia con idénticos criterios: “Lo más importante es cómo generar en todo el país la práctica del diálogo y la concertación que por muchos años nos ha enseñado la OIT”. Por ejemplo, aplicar esos criterios frente a la huelga permitiría que no se convierta “en factor de desestabilización política de la vida democrática” y que “no pase de ser un derecho escrito en la Constitución Política”. No puede desconocerse que Angelino Garzón hizo suficientes méritos para que la burguesía, agradecida, lo tuviera en cuenta para darle una paloma en el sillón principal del Ministerio del Trabajo, notable aspiración de tantos de sus congéneres.¹²

Pero los “precursores” locales de estos nuevos ardides simplemente silban lo que otros cantan. En un artículo reciente de Julio Robles, teórico argentino de la mencionada tendencia, se recuerda que, en 1989, en el XII Congreso de la Organización Regional Interamericana de Trabajadores, ORIT, filial en nuestro hemisferio de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, CIOSL, se adoptó como nueva orientación el sindicalismo sociopolítico.

Recuerda que su colega y compatriota, Julio Godio, ya en 1987, sostenía “la necesidad de pasar de un sindicalismo combativo pero sólo reivindicativo, a un sindicalismo sociopolítico, reivindicativo, pluralista, participativo y societario”. También anota que la OIT explicó que tal sindicalismo era una “herramienta simbólica” para que los trabajadores comprendieran las causas del marasmo

⁹ *Gaceta Constitucional*, n.º 11, *Exposición de motivos al Proyecto de Acto Reformatorio de la Constitución Política de Colombia* n.º 16, 27 de febrero de 1991, pág. 10.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ *Ibidem*.

¹² *Gaceta Constitucional*, n.º 45, *Asociación Sindical*, 13 de abril de 1991, pág. 2.

“desencadenado por las mutaciones económicas de finales del siglo XX, y actuar[an] creativamente frente a las mismas”.¹³

Robles nos ilustra sobre otros elementos de la nueva concepción: que se propone “derribar las paredes del sindicato”, para “salir” hacia la sociedad y la vida, y que éstas entren al mundo sindical; dejar de ser una entidad clasista para convertirse en una especie de “bisagra de diferentes expresiones” que pugna por el “entendimiento” y la “tolerancia”, y por la búsqueda de un “consenso normativo básico sobre la asignación o distribución de recursos entre grupos sociales”.¹⁴

Añade que a “la empresa” ya no sólo se le debe identificar con “patrón” y “empresario”, sino “incluir a los trabajadores y a los consumidores y usuarios”; tampoco igualársele con “cosa sujeta a propiedad”, ni aducir que la “ganancia” es su finalidad última, sino que su característica principal es el “servicio al público”, además de ser una abanderada del “desarrollo sostenible”.¹⁵

Y en cuanto a la actividad política, Robles nos dice que la nueva corriente busca establecer “una cultura del consenso sociopolítico y participación de la sociedad civil, en una institucionalidad que establezca la concertación y el diálogo social en el centro de la política”.¹⁶

Frente a la llamada internacionalización, nos informa que en 1991, en San José, en la Conferencia Internacional de la ORIT-CIOSL, se decidió que el movimiento obrero debía impetrar que se le permitiera jugar un “rol protagónico en los diseños y ejecución de los procesos de integración”. De ahí que estos sociopolíticos pretendan que las enormes y aguerridas movilizaciones que se han venido presentando contra las cumbres de los distintos organismos imperialistas (OMC, FMI, BM), en vez de convertirse en germen de una cada vez mayor conciencia antiimperialista internacional, se limite a ser un movimiento por “democratizar la globalización”.¹⁷

En otro documento, de 2001, publicado por el Instituto del Mundo del Trabajo, entidad que lideran los mencionados Godio y Robles, se convoca a enfrentar “la cara inhumana de la globalización” que destruye el “tejido productivo en los países periféricos” y que provoca el desempleo masivo y la pobreza incluso en los países industriales, no con “ideologías y valores de épocas superadas”, sino actuando “políticamente para que ambos procesos [el incremento del comercio y las inversiones y los pactos de integración] sean compatibles y se desemboque en una solución progresista para los pueblos de las Américas”.¹⁸

En el proceso de conformación del Alca llaman a que se incluyan políticas de rearticulación de los mercados sobre bases productivas; de apertura con protección selectiva de sectores económicos estratégicos; de compatibilidad entre el mercado continental y la estabilidad de los sistemas de integración subregionales; de comercio, para negociar con la OMC. Tratando de engatusar a los

¹³ *Pistas* n.º 7, abril de 2002. En www.mundodeltrabajo.org.ar/Pistas/pistasabril02/robles0402.htm

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ *Agenda y política de progreso frente al impacto de la globalización en el continente americano: la perspectiva del Alca*. En www.mundodeltrabajo.org.ar

pobres, agregan que es necesario incluir políticas de derechos humanos, sociales, laborales, culturales y de erradicación de la pobreza, que contemplen lo que la OIT denomina “trabajo decente”. Todo con el fin de que el Alca alcance el “consenso popular” y pierda su carácter negativo de “clásica zona de ‘libre comercio’” y de que “la estabilidad democrática actual” se garantice hacia el futuro.

Según esto, “la oposición sociopolítica a un Alca neoliberal” debe plantear la búsqueda de “un espacio común económico en el continente” que incluya “las expectativas y la participación de una variedad de organizaciones socio-políticas, sindicatos, movimientos campesinos, movimientos feministas y de igualdad de géneros, organizaciones de pueblos indígenas, movimientos ecológicos y de derechos humanos, etc.”; y “redireccionarse” para que vincule “a los excluidos con los sectores progresistas del campo de los incluidos”.¹⁹

Sostienen que de no aplicarse estas políticas y persistirse en el neoliberalismo radical se correría el riesgo de tener en el continente “sociedades segmentadas y socialmente injustas (...) divididas y enfrentadas política y militarmente. Así, en vez de democracia, ampliación del comercio, integración y desarrollo integrado, se están construyendo, en realidad, economías débiles, incapaces de integrarse a la economía mundial, sociedades frustradas y proclives a los fundamentalismos mesiánicos”.²⁰

Agregan que el resultado “absolutamente previsible, no será la integración de las Américas, sino el descrédito de todos los procesos de integración continental” y, (¡válganos Dios!) “la emergencia al primer plano de los tradicionales sentimientos anti-norteamericanos que existen en la región.”²¹

En fin, de “lo que se trata es de **tomar partido por una opción positiva sobre la globalización**”; de “una estrategia que sirva para favorecer la aplicación de políticas asentadas sobre el desarrollo integrado, la democracia y la inclusión social”; y desde luego de adoptar “**una Carta Social de Derechos Fundamentales de nivel continental**”. (Los subrayados son del documento original).

Amén de lo dicho, es claro que al sindicalismo sociopolítico se le ha encargado la infame tarea de facilitar la construcción del Alca, que entregará a América entera a los monopolios norteamericanos.

Volviendo a nuestros lares, las elecciones para los comités ejecutivos de la CUT y de Fecode, llevadas a cabo el 4 de octubre del año pasado, constituyeron una ocasión más para que se arrojara luz sobre los “nuevos” derroteros del movimiento sindical, encarnados ahora por Carlos Rodríguez.

El politólogo Eduardo Pizarro Leongómez caracterizó al preponderante en Colombia, como “uno de los modelos sindicales más negativos que existen para la defensa de los intereses populares: el sindicalismo de confrontación”. Para el analista:

“En este modelo sindical, no es posible construir un espacio de convergencia de intereses con las empresas (por ejemplo, discutir su sostenibilidad financiera), ni tampoco con el estado (por ejemplo, coadyuvar con sus planes a favor del desarrollo nacional) (...) En cuanto hace a los trabajadores, este modelo de lucha sindical se ha llevado a cabo con total autonomía del futuro de las empresas, muchas de las cuales han terminado en la ruina total (...) En cuanto hace al país, este modelo sindical se niega a pensar en la nación como un todo en la cual estén no sólo divergencias, sino, igualmente, intereses colectivos”.

¹⁹ Ibidem.

²⁰ Ibidem.

²¹ Ibidem.

La misma propaganda de achacarles a los salarios los reveses de las empresas y del fisco. Pizarro concluye:

“Se trata de reformular la orientación del sindicalismo hacia lo que podríamos denominar un sindicalismo social (...) Es decir, que los sindicatos deben luchar no solo a favor de beneficios particulares para sus afiliados, sino, igualmente, a favor de beneficios colectivos”.²²

La orientación que reclama como novedosa consiste, pues, en que los sindicatos ya no se preocupen por los derechos de los obreros sino por los “colectivos”, tales como los rendimientos financieros de los bancos, las utilidades de los prestamistas externos y las ganancias de los grandes monopolios. Pizarro Leongómez expresa que muchos analistas creen que Carlos Rodríguez logrará que la CUT dé este viraje.

La revista *Semana* comentó con mayor regocijo los resultados de la elección en la CUT:

“Carlos Rodríguez es visto como un líder sindical concertador que privilegia el diálogo y la negociación (...) **Que el nuevo jefe de la CUT sea amigo de la negociación es una buena noticia para el gobierno de Uribe. En momentos en que las cámaras legislativas están tramitando reformas laborales y pensionales la actitud que tome el movimiento sindical no es desdeñable. Puede ser la diferencia entre una negociación política o una medición de fuerzas**”.²³

Como se puede ver, *Semana* había anticipado que frente a las reformas laboral y pensional no habría lucha, gracias al papel cómplice de Carlos Rodríguez, por lo cual no es raro que las centrales hayan convocado apenas un par de “jornadas” para cubrir las apariencias.

Pero no se piense que se trata sólo de columnistas afectos a la tendencia en boga, el propio Álvaro Uribe se detuvo a elogiar y a trazar línea a la nueva corriente sindical, en Belencito, en el acto en el que se refrendó otra transacción ruinosa para los trabajadores de Paz del Río, con la presencia de los presidentes de la CUT, la CGTD y la CTC:

“Con emoción, desde el corazón, llamo a todos mis compatriotas a dar un gran aplauso a estos trabajadores y a estos pensionados. Pero no solamente por el sacrificio económico, sino fundamentalmente por la actitud. Porque en todo este proceso, no encontramos un sindicalismo resabiado. No encontramos un sindicalismo apegado a un discurso dogmático. No encontramos un sindicalismo de prebendas y de ocio (...)”

“Encontramos un sindicalismo maduro, de trabajo, de responsabilidades patrióticas, de ética empresarial. Un sindicalismo con visión de futuro. Un sindicalismo con capacidad de sacrificio, para sacar adelante la producción y el empleo, esenciales intereses de la Nación (...)”

“Yo agradezco infinitamente la presencia en todo este proceso de las centrales obreras. Ellas con discreción y con madurez, han ayudado para que se dé este acuerdo. Y agradezco su presencia en el día de hoy. Sé que los directivos de las centrales obreras nos van a ayudar a conducir este proceso, para que no falte una sola firma, como lo pedía Edgar Plazas. Ustedes todos nos tienen que ayudar (...)”

“Quiero destacar que este es un paso muy importante para hacer el tránsito hacia el sindicalismo empresarial, hacia el sindicalismo de participación. Para dejar atrás la expresión meramente reivindicativa del sindicalismo y avanzar hacia el sindicalismo de participación (...)”

²² *El Tiempo*, ¿Hacia un nuevo sindicalismo?, 11 de noviembre de 2002.

²³ *Semana*, *Los sindicalistas cercanos a Uribe propiciaron que la presidencia de la CUT se le escapara a la izquierda radical*, 25 de noviembre de 2002. A lo largo de este documento, lo resaltado en negrilla es de nuestra autoría, salvo que se indique lo contrario.

“Colombia, construyendo prudentemente estos pasos, puede lograr, sin bulla, que en todas empresas públicas y privadas haya efectiva participación de trabajadores (...)

“El camino no es la lucha de clases, el camino no es la violencia, el camino no es el odio. El camino es que en el sector empresarial haya una reflexión en favor de la solidaridad. Y en el sector de los trabajadores, una reflexión para abrazar la causa del sindicalismo empresarial (...)

“Por ejemplo, el señor ministro Diego Palacio Betancur, de la Protección Social, está trabajando con todo el entusiasmo para lograr unos acuerdos con los trabajadores del Seguro Social, a fin de que ellos puedan operar algunas de las Eses, en beneficio de esa entidad (...)

“Y quiero decir que han sido gratas las conversaciones con los presidentes de las centrales obreras para avanzar en ese camino. Como aquí, en Boyacá, en Paz del Río, ha habido un sindicalismo con un alto grado de cultura política. (...)

“Públicamente expreso a todos los colombianos hoy desde Boyacá, que el señor Ministro de Protección, en compañía del Director de Planeación y del Ministro de Hacienda, se propone tener unas reuniones continuas, permanentes, con mucha frecuencia, con los presidentes de las centrales obreras, para buscar cómo podemos mejorar los niveles de inversión social (...)

“Sé que las centrales obreras, manejando tantas dificultades, muchas veces entran en contradicción con los gobiernos y tienen que expresar su voz crítica. Y el Gobierno la recibe respetuosamente. Pero también hemos encontrado unos dirigentes obreros en Colombia con mucha madurez que nos quieren ayudar a buscar caminos para que el país salga adelante”.²⁴

Escuchando las lecciones del presidente y sacrificando en el altar del sindicalismo empresarial y participativo a los obreros de Paz del Río, era como los iscaríotes de las centrales obreras “preparaban” el paro cívico nacional para protestar contra la liquidación de Telecom y el fraccionamiento del Seguro Social y Ecopetrol. Carlos Rodríguez resultó alumno aventajado de Uribe, como lo mostró en el reportaje publicado en *El Tiempo*, el 11 de agosto, en la víspera de otra de sus “audacias proletarias”:

“Una negociación no es para ganar o perder sino para impulsar salidas al problema. El enemigo no es el oponente en la mesa sino el conflicto mismo (...) Ahora **no estamos negociando solo para los intereses de los trabajadores, sino para el conjunto de la sociedad** (...) Hoy, el sindicalismo está preocupado no sólo por la convención colectiva de trabajo sino **por el fortalecimiento de la entidad como tal, llámese empresa privada o estatal** (...) Hay compañeros que aún consideran que la movilización es para la confrontación y la algarabía (...) **No estamos planteando no pago ni exoneración y reprogramación [de la deuda externa]**, sino un período de gracia de dos años (...) Es posible crear empleo asistencial inmediato: Embellecimiento de parques, atención social, etc. Lo importante es dar ocupación para no tener una bomba social (...) Sintraeolcol ha asumido contratos sindicales con mucha responsabilidad. A Croydon, los trabajadores la pusieron a funcionar de nuevo. Está también el caso de Paz del Río (...) Después del Referendo, **vamos a iniciar una campaña civilista y democrática en defensa del Estado Social de Derecho** (...) No le tenemos miedo a las coincidencias y no queremos es polarizar la Nación (...) Uno no saca nada con tener una buena confrontación, si no tiene resultados tangibles para presentarles a los trabajadores y la sociedad (...) Creemos que tenemos que fortalecer la consciencia (sic) social (...) La consciencia de clase sectariza y plantea la constitución de un solo partido. Y donde hay un solo partido, no hay vida (...) [Uribe] Es un hombre honesto. Logró el poder por el rechazo de la violencia de todos los colombianos y tiene un ritmo de trabajo que hay que aplaudir”.²⁵

²⁴ *Palabras del presidente Uribe en Acerías Paz del Río*. Sogamoso, 10 de julio de 2002. En www.presidencia.gov.co

²⁵ *El Tiempo*, ‘No queremos polarizar al país’ advierte presidente de la CUT Carlos Rodríguez, 11 de agosto de 2003.

Según Rodríguez, quienes despiden trabajadores, cierran empresas, arruinan la nación, no son enemigos, lo es el conflicto; Telecom se liquida militarizando las instalaciones, y el sindicalismo ha de responder sin confrontación ni algarabía, con mansedumbre. Para pagar la usurera deuda externa se clausuran hospitales y colegios y se le ponen impuestos al pan, y la cabeza de la central mayoritaria, en vez de denunciar la explotación y el robo que hay en ella, nos llama a pagarla. El Estado arremete contra los oprimidos, y el presidente de la CUT los invita a una campaña civilista y democrática en defensa de ese mismo Estado, al que adorna con los adjetivos “social” y “de derecho”. La gran burguesía y el imperialismo, movidos por un odio de clase visceral, despojan y humillan a las masas, y Carlos Rodríguez condena la conciencia de clase proletaria, y proclama que a Uribe, el Fujimori que ha entristecido las mesas obreras y procura la ruina del país, no sólo debe ponerse como paradigma ético, sino gloriarle el ritmo de trabajo dedicado a vapulear a los colombianos.

Lo más grave de todo es que en el momento en que más se lesionan los intereses de los trabajadores, quien ha sido elegido su vocero sostiene que está preocupado “no sólo” por la convención colectiva de trabajo sino por el fortalecimiento de las empresas como tales. Este es el sindicalismo empresarial, celestina de todas las entregas.

Llamemos la atención acerca de cómo dirigentes políticos, analistas y empresarios repiten que los sueldos arruinan las empresas. Cómo se engaña con esto la burguesía colombiana, cuando, a la vez que se queja de la falta de demanda para sus productos, apoya la rebaja de los salarios. De la merma de la paga sólo se benefician un puñado de multinacionales, el capital financiero y los grandes exportadores, pero las industrias que venden en el mercado colombiano padecen por la mínima capacidad adquisitiva del pueblo. La verdad es que la ruina de los trabajadores es ruina para la república.

No obstante esta verdad de bulto, los teólogos de la tolerancia y la conciliación de clases continúan sembrando entre los colombianos la discordia: a los desempleados les inculcan que sus desventuras se originan en los “privilegios” de los asalariados, a los pequeños y medianos empresarios los exaltan contra el obrerismo y los funcionarios públicos, aduciendo que son los culpables de los altos impuestos y de las terribles dificultades de los negocios. La calumnia, que en tantas ocasiones se disfraza de académica, ha venido abonando el terreno a los golpes que se propinan recurrentemente a quienes a diario tienen que vender su fuerza de trabajo por una paga hartamente mezquina. Cuánta vileza entraña el que los líderes del sindicalismo hagan eco a estas campañas difamatorias. Y la dirección del MOIR, en su arrobamiento por las diversas vertientes del sindicalismo sociopolítico, no repara en el daño que le causa esta especie difamatoria a la verdadera unidad de la nación, por eso se niega a enfrentar el debate y considera dogmatismo y sectarismo ponerse a discutir tan graves asuntos. Estas lides teóricas no caben en su concepción obsequiosa sobre el frente único. No descartemos que haya mucho de buena intención en este unitarismo a ultranza, pero es vano, pues carece de todo seso.

Recalquemos que la nueva orientación del sindicalismo es tema en el que coinciden plenamente Álvaro Uribe y Carlos Rodríguez:

- El primero ordena que no sea resabiado, que sea maduro. El segundo obedece cuando rechaza la confrontación y la algarabía.
- Uribe exige la capacidad de sacrificio —es decir de inmolar a los trabajadores—, Rodríguez concede que no se negocia para ganar o perder sino para impulsar salidas al problema. De

manera que se puede menguar el pago de horas extras o dominicales dizque para reducir el desempleo.

- El Primer Mandatario clama porque se deje atrás el sindicalismo reivindicativo y que se avance en el de participación. El presidente de la CUT responde que no está negociando sólo por los intereses de los trabajadores sino por el conjunto de la sociedad. ¡Puras tretas para feriar las convenciones colectivas!
- Uribe receta un sindicalismo empresarial, en el que los directivos obreros administren, por ejemplo, Empresas Sociales del Estado, y Rodríguez, presuroso, recuerda que él lo ha impulsado cuando, luego de la privatización del sector eléctrico, Sintraeleccol asumió contratos sindicales.

He ahí el “nuevo” sindicalismo, que se adapta como el guante a la mano a las necesidades del dominio imperialista: en vez de proteger las conquistas obreras, abandonarlas; entregarlas a cambio de que los jefes participen en las juntas directivas de las empresas o de que sean accionistas. Que se minimice el salario de la masa para que los burócratas reciban el de la traición. Eso sí, lo reconoce Uribe, “las centrales obreras (...) tienen que expresar su voz crítica” para que puedan engañar a las bases.

Estas posiciones son liquidadoras. Merecen la crítica implacable, no porque no sean socialistas o marxistas, sino por abandonar los derechos más elementales de los proletarios. ¿Será radicalismo, será sectarismo, pedirle a una dirección obrera que se esfuerce por parar los despidos de miles de personas y las rebajas de los salarios?

Lo ganado con lucha se pierde en la concertación

Los efectos combinados de la política oficial y de la concertación han significado desempleo, miseria en los hogares obreros, humillación e incertidumbre en el puesto de trabajo. Y para mayor infortunio de las gentes laboriosas, los “renovadores” del sindicalismo han pasado del dicho al hecho.

Jaime Dussán viene pregonando que los maestros en vez de confiar su suerte a la propia brega, la encomienden a los cabildeos de quien dice haber llegado al Senado a legislar y no a escribir constancias. En desempeño del encargo que se hiciera a sí mismo, ha refrendado las medidas más lesivas contra el magisterio colombiano. Todo con la anuencia de la mayoría del Comité Ejecutivo de la Federación de los educadores, constituida por conmlitones de dicho parlamentario.

En 1995, esa mayoría, confiándose a unas falaces promesas gubernamentales, marginó al magisterio de la protesta general de los estatales contra la fascistoide ley 200 o Código Disciplinario Único, expedido ese año, y que derogaba los aspectos correspondientes del estatuto docente;²⁶ al poco tiempo, el Código no sólo se les empezó a aplicar a los maestros sino que el dussanismo negoció su reglamentación y, en últimas, que la ley 200 fuera en realidad la norma mediante la cual se procesara a los maestros, ya que se inventó la astucia de que se les sometiera tanto a ella como al Estatuto Docente. En 1996 colaboró con la ministra María Emma Mejía en su programa de “incentivos” que, mediante una evaluación de desempeño, conducía a la exclusión de docentes que no se ajustaran a

²⁶ *Tribuna Roja* n.º 62, *Una batalla impuesta a los trabajadores estatales*, 27 de octubre de 1995, pág. 8.

los deberes y prohibiciones de la ley 200.²⁷ En 1997, fracturó la unidad del Comando de Paro de los empleados estatales, firmando un acuerdo particular en la Casa de Nariño. La misma tendencia se hizo de la vista gorda frente a la privatización de colegios de Bogotá y Medellín, pues algunos protegidos del senador fungían de altos funcionarios en las Secretarías de Educación de esas ciudades.

Luego de la importante batalla que libraran estudiantes, profesores y padres de familia contra el proyecto de acto legislativo 012, los dirigentes del Partido Socialista Obrero Colombiano, PSOC, y la Unidad Democrática, UD,²⁸ ante el hecho de que la burguesía confabulada había logrado derrotar al magisterio, alegaron que lo conveniente hubiera sido aplicar la “táctica inteligente” de plegarse a cualquier clase de acuerdo. Tales “tácticas inteligentes” —que prevalecen desde entonces— no tardaron en demostrar su naturaleza corrosiva. A Dussán se le facultó para negociar el proyecto de ley 120 y a la postre él y el ministro Santos cocinaron la ley 715 de diciembre de 2001, base para la andanada contra el magisterio, que ya va a completar dos años.

La cadena de golpes ha causado una profunda desmoralización entre los educadores. Empero, cuando se comienzan a escuchar las quejas de éstos, y las condiciones se prestan a desenmascarar las felonías de los dussanistas —prerrequisito para enfrentar de verdad la política oficial— el Partido apenas deja una constancia a puerta cerrada en la Junta Nacional de Fecode, de la cual reparte unas cuantas copias y enseguida calla, convoca cándidamente a los traidores de la víspera para que encabecen la batalla venidera y, en algunos casos, solo varios meses después de cometidas las tropelías publica los reparos. Tal proceder torna inocua la crítica. Para que ésta surta sus efectos aleccionadores se requiere que sea oportuna, precisa, clara y que señale directamente a los dirigentes desleales.

Como prueba de la actitud impenitente de fiarse del enemigo y desdeñar la capacidad de pelea de las bases, el presidente de Fecode, Jorge Guevara, hizo un resumen de sus posiciones:

“No puede seguir el sindicalismo colombiano en la política contestataria de ver al Estado como nuestro enemigo (...) Llegó el tiempo de la concertación y la movilización (...) nosotros somos de este régimen, del estado social de derecho y de la Constitución del 91 (...) El magisterio entendió que no podía seguir con una política de todo o nada en las luchas porque eso no condujo a nada. Los últimos cuatro años significaron nada de avance y más de retroceso (...) A nuestro juicio faltó vocación de concertación (...) En esta coyuntura no hay un espacio para hacer un paro y el sindicalismo así lo ha entendido (...)”

Además anunció nuevas entregas a cambio de nada:

“Estamos dispuestos a subir nuestros aportes del 5 al 7,5 por ciento y a bajar el retiro forzoso de 65 a 60 años”.²⁹

Tan rotunda muestra de sumisión al régimen, llevó a *El Tiempo* a titular: “La derecha se toma Fecode”, y a que el uribismo, entusiasmado, arreciara la andanada. El MOIR ni se inmutó.

El Plan Nacional de Desarrollo le quitó derechos pensionales y de salud a todo el magisterio y, en particular, a quienes se vinculen a partir de su aprobación. Jaime Dussán rindió ponencia favorable y Luis Carlos Avellaneda emitió su voto afirmativo, ante lo cual el Partido dejó la consabida constancia

²⁷ *Tribuna Roja* n.º 65, *En defensa del Estatuto Docente y la Ley General de Educación*, 23 de abril de 1996, pág. 8.

²⁸ Partidos que dirigen Jaime Dussán y Luis Carlos Avellaneda, respectivamente.

²⁹ *El Tiempo*, *La derecha se toma Fecode*, 17 de noviembre 2003.

crítica, que cubrió al día siguiente con una misiva en la que invitaba a los impulsores del plan uribista dizque a preparar el gran Paro Cívico Nacional.

En su actuar liquidacionista, los directivos de Fecode se mantienen indolentes ante los padecimientos de las bases, no las organizan ni las alientan, y los educadores, quienes fueran pilar de grandes movilizaciones, ya abatidos, escasean en las protestas, por lo menos en Bogotá.

Por desgracia, este caso no es excepcional. El sindicato del sector eléctrico, Sintraelecol —del cual Carlos Rodríguez fue presidente durante cinco períodos— entrampó a sus afiliados para que aceptaran la subasta de las empresas del ramo, ilusionándolos con que serían accionistas de ellas. La treta se basó en el artículo 60 de la Constitución de 1991, cuyo verdadero propósito consiste en facilitar la entrega de valiosos activos del país, tales como la generación, transmisión y distribución de energía a los monopolios extranjeros.³⁰ Así, con la complicidad de los Carlos Rodríguez, Endesa se tomó la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá y las hidroeléctricas de Chivor y Betania. Otras transnacionales hicieron lo propio. Incorregibles, los congéneres de Rodríguez acaban de firmar con Electricaribe y Electrocosta, empresas hoy en manos de la también ibérica Unión Fenosa, una convención colectiva por cuatro años, complaciendo la antigua exigencia patronal consistente en que dichos pactos se firmen para períodos prolongados. Aceptaron la “racionalización del sistema pensional” refrendando que algunos factores salariales extralegales no se contabilicen para calcular el monto de la jubilación, con lo cual la mesada disminuirá en Electrocosta en un 25% y, en Electricaribe en 12.5%, además, la edad para pensionarse se incrementa en alrededor de 2.5 años. Rubricaron “la incorporación del modelo de gestión a diversos aspectos como: estructura salarial, clasificación profesional, sistema de movilidad y el desarrollo profesional”,³¹ condenando a los operarios a sufrir los rigores de la superexplotación a través del “modelo de gestión” o de “productividad”; aceptaron también ajustar a la nueva ley laboral los recargos nocturnos, los dominicales y festivos y los compensatorios. Como se ha vuelto costumbre, signaron el cambio de las condiciones para los nuevos operarios. Según las compañías, el acuerdo se logró por la “coincidencia de metas” y por la voluntad de “concertación y diálogo”. El gobierno se mostró exultante: el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, dijo que el pacto había sido un “gana-gana”, y el de Minas y Energía, Luis Ernesto Mejía, afirmó que Sintraelecol procedió “como un sindicalismo participativo más que reivindicatorio (...) Ese es el Estado Comunitario, ese es el Estado participativo, ese es el Estado que quiere un sindicalismo empresario (...)”.³²

³⁰ En su *Informe Sobre el Desarrollo Mundial de 1997: El Estado en un mundo en transformación*, el Banco Mundial planteó: “Ganarse el asentimiento de los empleados es esencial para que las privatizaciones tengan éxito. Algunos países han dado acciones a los empleados o han llevado a cabo la privatización mediante la compra de las empresas por los trabajadores y directivos. Otros han ofrecido generosas indemnizaciones por despido (...)”

(...) Una propiedad de base amplia puede contribuir a que el público apoye la privatización. Una de las estrategias para lograrlo ... consiste en distribuir cupones de privatización a los particulares que los pueden cambiar por acciones otro sistema ... es la oferta pública inicial de acciones a los ciudadanos a precios competitivos. Ambos sistemas se pueden concebir de manera que den cabida a un socio estratégico fuerte”, (pág. 74). Ejemplo claro de la connivencia entre los Carlos Rodríguez y la política del Banco Mundial.

³¹ *La República, Trabajadores de Electricaribe y Electrocosta firman convención*, 3 de octubre de 2003, pág. 13. Además, www.lalibertad.com.co/oc3/2/21.html.

³² www.presidencia.gov.co/cne/2003/octubre/02/23022003.htm.

En junio pasado, cuando los presidentes de las centrales viajaron a Belencito, no sólo lo hicieron para escuchar la perorata presidencial, sino para continuar su práctica proditoria. Con su presencia avalaron que se abrogara lo que quedaba de la convención colectiva de Acerías Paz del Río. En 1996, el sindicato había ayudado a engatusar a sus afiliados para que con el 40% de sus cesantías compraran acciones de la siderúrgica a un valor de 10 pesos, las que a la vuelta de un año llegarían a costar sólo 40 centavos. A los trabajadores, con la complicidad de sus jefes gremiales, les birlaron unos 8 mil millones de pesos. Mientras que los obreros metalúrgicos hacen estos ingentes sacrificios, la empresa se sigue hundiendo bajo el peso de la política de *apertura económica*, puesto que el gobierno continúa franqueando la entrada a los productos siderúrgicos del extranjero.

Sittelecom, que en 1992 marcara el camino de la lucha contra la privatización, se convirtió en su vocero, cuando aprobó por unanimidad, en la asamblea nacional de diciembre de 1999, promover que los trabajadores y pensionados de Telecom se desafiliaran de la Caja de Previsión Social de las Comunicaciones, Caprecom. Pocos días después, la junta directiva determinó impulsar la afiliación a la multinacional Colsanitas³³ y en los meses posteriores se dedicó febrilmente a empujar tan funesta decisión, con los mismos argumentos con los cuales los reaccionarios abogan por el cierre o venta de las instituciones de la seguridad social: que Caprecom era ineficiente, corrupta, burocrática. La Unión Sindical de Trabajadores de las Comunicaciones, USTC, fruto de la fusión de Sittelecom con el sindicato de los técnicos, aceptó en la convención colectiva de 2002, que Telecom se sometiera a los fallos de los tribunales internacionales de arbitramento en lo atinente a los leoninos contratos de *joint venture*, que constituyen una verdadera sangría para las finanzas nacionales. El rechazo que se había levantado contra estos negociados se transó por dos cargos para el sindicato en la junta directiva de la empresa.

Señalado lo anterior, no puede causar extrañeza que, cuando el pasado 13 de junio la ministra de Comunicaciones y el presidente de la compañía anunciaron de manera espectacular la liquidación de Telecom, que se había convertido en un secreto a voces por lo menos desde un mes antes, los jefes sindicales fueran sorprendidos sin haber realizado una labor para llevar a los trabajadores al combate, de tal suerte que el tardío llamado del 10 de junio a la protesta no pudo lograr su objetivo.

El 1º de noviembre de 2001, los más importantes voceros de las centrales obreras a la cabeza de Sintraseguridad Social y otras organizaciones de empleados de la salud, hicieron una antesala de varias horas en Palacio para refrendar con Pastrana el desmonte de la convención colectiva del Instituto de los Seguros Sociales, con lo cual se suprimió la retroactividad de las cesantías, se disminuyó el monto de las pensiones, se congelaron los salarios básicos y se excluyó a los nuevos funcionarios de todos los beneficios convencionales. A semejante traición, los voceros sindicales le colgaron la constancia ilusa de que las modificaciones a la convención colectiva dejarían de regir si en el plazo de unos meses no se hubieren cumplido algunos de los compromisos asumidos por el gobierno, entre otros, definir y determinar, “si hay lugar a ello”, el reconocimiento de las deudas de

³³ A propósito de este episodio la actitud del Partido no fue clara. Meses después, ya sobre la leche derramada, el camarada Valencia dijo que si a causa de esta traición era necesario renunciar al cargo logrado en la junta directiva del sindicato, debía hacerse. Pero nunca se conoció siquiera un pronunciamiento partidario al respecto, lo cual no deja de ser urticante cuando se sabe que el único militante del MOIR elegido a la junta directiva, lo fue con algunos votos provenientes de una de las fuerzas que fomentaron la entrega del jugoso negocio de la salud a la multinacional.

la Nación con el ISS por concepto de salud, de riesgos profesionales y pensiones; allegar “recursos frescos” por un billón de pesos, etcétera.

Más adelante, la cúpula sindical bautizó esta criatura con el nombre pomposo de “cláusula social de rescisión”, cuando, en el colmo de la astucia, le propuso al Congreso introducir un inciso en la reforma laboral en el que constara que ésta dejaría de regir si, luego de 18 meses de puesta en práctica, no hubiere creado empleo³⁴. Con dicha patraña leguleya los dirigentes encontraron la forma de escurrirle el bulto a la lucha y entregarlo todo tratando de mostrarse como opositores a las disposiciones lesivas. Aún hoy no faltan quienes se quejan de que el gobierno haya incumplido el repertorio de promesas del “Pacto nacional por el fortalecimiento del ISS y la seguridad social”, como si no fuera obvio que aquéllas eran una añagaza, que lo único real era la renuncia a los derechos convencionales.

Lo más insólito, la mayor muestra de hasta qué punto ha llegado el cinismo de estas camarillas es que quienes se dedicaban a semejantes actividades en el Palacio, eran los mismos jefes del paro cívico nacional que se había convocado para ese 1º de noviembre de 2001. Cuando las masas de trabajadores desfilaron hacia la plaza de Bolívar para exigir el respeto a sus derechos, las cabezas de las centrales obreras esperaban sumisas a Pastrana para culminar la capitulación. Si algo afortunado tuvo esta fecha es que desnudó el proceder de los nuevos vendeobrereros: sacan proclamas contra el Fondo Monetario Internacional, al paso que rubrican la aplicación de su política; se oponen verbalmente a la privatización, al tiempo que medran a su amparo; peroran contra la política oficial y a puerta cerrada la suscriben; vociferan contra el neoliberalismo, pero facilitan su depredación.

En el análisis de este acontecimiento, el propio Héctor Valencia sentó las bases de la posición veleidosa que ha venido sosteniendo el MOIR. El 9 de noviembre de 2001, apenas ocho días después de esos actos bochornosos, en el lanzamiento de la candidatura del compañero Jorge Robledo al Senado, señaló:

“El hecho de que Pastrana junto a los ministros Santos y Garzón, se haya afanado a presentar esta traición como un ejemplo de mesura y patriotismo, **exige que los dirigentes de las centrales obreras respondan creando las reales condiciones para que se desplieguen las justas e imprescindibles audacias proletarias.**”³⁵

He ahí la nuez del asunto: que quienes cometen las traiciones no sean puestos sistemáticamente en la picota hasta ser desenmascarados y derrotados sino que, luego de la reconvencción formal, se les dé el menudo encargo de abrirles paso a los combates obreros. Casi tres largos meses después, el 20 de enero de 2002 —dando una muestra extraordinaria de su sentido de la oportunidad—, la Comisión Obrera Nacional del Partido expidió un boletín en el que critica el mencionado acuerdo.

La reacción tomó nota de cuán fácil resultaría arrasar no sólo la convención sino el propio Instituto de los Seguros Sociales, acto que llevó a cabo Uribe Vélez, en uso de las facultades concedidas por

³⁴ “Nuevos artículos y proposiciones sustitutivas para incluir en la ponencia del proyecto ‘Para promover la Empleabilidad y desarrollar la Protección Social’ a presentar en las plenarias de Senado y Cámara”, documento elaborado por “la comisión integrada por abogados laboristas y dirigentes sindicales, surgida de la reunión del viernes 29 de noviembre, citada por senadores y representantes independientes en la que participaron las centrales sindicales CUT, CGTD y CTC y otros dirigentes de sindicatos nacionales”.

³⁵ *Tribuna Roja* n.º 86, *Hacia una gran campaña por la resistencia civil*, 21 de noviembre de 2001.

la ley 790. En esta ocasión los jefes sindicales no llegaron a dar el visto bueno al atropello, pero hicieron casi otro tanto, ya que en cambio de procurar la lucha, se sentaron por meses con los funcionarios oficiales a ofrecer dismantelar aún más la convención colectiva de trabajo, mientras que el gobierno exigía su completa supresión. Después del ojo afuera, quienes no habían hecho esfuerzo alguno por impedir el golpe, se aprestaron “a declarar la hora cero de la huelga general”³⁶. Años de conciliación, de esfuerzos por adormecer a las bases, no se remedian con un gesto histriónico de último minuto.

Ya que mentamos el tema del “paro cívico”, veamos otras muestras de cómo sus promotores de ahora han venido convirtiendo en caricatura esta forma de lucha enraizada en la historia del país. El del 31 de agosto de 1999 se recuerda, entre otras cosas, por los llamados de los dirigentes a la población a no salir a protestar, a quedarse en las casas, y por el afán de Luis Eduardo Garzón, presidente de la CUT de aquel entonces, por levantarlo a sólo pocas horas de iniciado, lo cual mermó fuerza a la jornada. Esto, como debe recordarse, suscitó el justificado reproche del presidente de Salvación Agropecuaria, Ángel María Caballero, quien señaló que los campesinos no habían ni siquiera alcanzado a llegar a las carreteras para sumarse al paro. Estos generales comodones se esmeran más en desmovilizar que en fortalecer las peleas populares. Además, a partir de aquella oportunidad, la cúpula gremial encontró el subterfugio de las eternas e inanes “mesas de negociación”, en las cuales se habla de todo, al mismo tiempo que el gobierno hecha a rodar sus ucases antinacionales.

Para “oponerse” a las medidas dictadas por Uribe al amparo de las facultades de la ley 790, que vencieron el 27 de junio de 2003, el Comando Nacional Unitario programó un nuevo “paro cívico” para el 12 de agosto, fecha que por tardía mostraba la falta de ánimo para responder certeramente a la andanada y que, además, coincidía con la toma de Bogotá en repudio al Alca, que preparaba desde hacía varios meses Salvación Agropecuaria. Desde luego, “paro cívico nacional” y marcha agropecuaria eran tareas excluyentes entre sí, siempre y cuando no se pretendiera desnaturalizar el contenido de aquél. Lo único que puede destacarse de la jornada es la marcha campesina, pues no hubo rechazo sindical al cierre de Telecom ni al desbaratamiento de Ecopetrol y del Seguro Social.

De nuevo, la cúpula sindical amarilla perpetró los actos más aviesos de abdicación. Carlos Rodríguez, a quien en su calidad de presidente de la CUT le correspondía encabezar los preparativos, ni siquiera hizo mención del paro en la columna que le publicó *El Espectador* del 6 de julio, se limitó a enumerar las medidas oficiales y a llamar a “la movilización social, con una agenda que nos conduzca hacia el acuerdo nacional que contenga un modelo alternativo de desarrollo, porque ¡otra Colombia es posible!” Y el 11 de agosto, en las declaraciones para el diario *El Tiempo* citadas arriba demostró que no tenía ningún interés en sacar adelante el paro programado para el día siguiente.

La mera enumeración de estas arterías demuestra que si no se combate a sus ejecutores, el movimiento obrero no se levantará de su derrota. Pero no pretendemos afirmar que las profundas tribulaciones que vive el proletariado se deban exclusivamente a la actitud de la dirección sindical. Es claro que la apostasía por parte de las pandillas dirigentes de los Partidos y los Estados en los que

³⁶ *El Espectador*, *El gobierno nacional y los intereses privados liquidan el ISS y se apropian para su beneficio del patrimonio público. Convocamos a la nación a la lucha para evitar este atraco a la sociedad colombiana.* Declaración suscrita por “Sintraseguridadsocial”, la Cut, El Comando Nacional Unitario y otras organizaciones, 6 de julio de 2003.

triunfó el socialismo durante el siglo pasado y el posterior hundimiento de la Unión Soviética son factores que los imperialistas han aprovechado para difundir la especie de que el único régimen posible es el capitalista y que los obreros deben resignarse a su suerte de parias y oprimidos. Esto ha exaltado a la burguesía internacional y nacional, que se ha cebado en un movimiento obrero confundido y desmoralizado. El desempleo, la inestabilidad laboral, la intransigencia de los gobiernos, la arbitrariedad y la represión brutales han asestado golpes a las organizaciones y a las luchas de los trabajadores. Contra esos factores adversos han de levantarse los explotados, pero no lo logran porque la propia jefatura sindical y el grueso de la llamada izquierda, en vez de animar a la masa, de esclarecerle el pensamiento, la desorienta, la ilusiona, la engaña y la traiciona. Entre más grandes sean los obstáculos y las dificultades, más necesario es un mando lúcido y consecuente. Los asalariados han mostrado su indignación y rechazo a la agresión gubernamental, por ello han concurrido masivamente a las manifestaciones a las que se les ha convocado. Pero la dirección sindical no ha intentado convertir estas expresiones de protesta en una lucha continua capaz de defender las empresas y los derechos laborales.

Dediquemos unos párrafos a dos asuntos de palpitante actualidad y con los cuales la dirección del MOIR pretende justificar la conciliación con las camarillas patronales. Cuando hemos criticado las complacencias con ellas, se nos ha dicho que el Partido tiene la disposición de hacer todas las concesiones necesarias para que las cúpulas gremiales se pongan al frente de la lucha contra el Referendo y el Alca. Al argumento le presta fuerza el hecho indudable de que si hay atentados graves contra la soberanía económica, la producción nacional y los derechos de los trabajadores son estas dos políticas imperialistas y del uribismo.

Es obvio que para agrupar los sectores y personas susceptibles de combatir esos aviesos propósitos, se requiera hacer gala de una gran flexibilidad. Pero nadie puede creer que a esa unidad se le hace un buen servicio alcahueteando las privatizaciones, los cierres de empresas, y las medidas que esparcen todavía más miseria entre las amplias masas encargadas de ponerle nervio y pulso a la batalla. La legión obrera vapuleada y desmoralizada, en gran parte por la actividad desastrosa de sus directivos gremiales, carecerá de las mínimas condiciones subjetivas para acometer la tarea.

¿Cuál consecuencia puede haber en la lid contra el Referendo, que congela los salarios y las pensiones de los funcionarios del Estado, si simultáneamente se firman pactos que reducen los pagos de los mismos o arrasan las convenciones colectivas, o se da el visto bueno al cierre de numerosas empresas estatales? Esto también puede predicarse respecto del Alca, que requiere hacer totalmente laxas las normas laborales y exige la completa libertad de inversión en todas las áreas estratégicas, incluidos los servicios públicos. ¿Cómo se bregará con decisión contra ese acuerdo de “libre comercio” si se encubre la privatización o si se pregona—como lo hace Sintraelecol y otros—que los trabajadores, en vez de oponerse a la subasta de los bienes públicos, deben “lucrarse” de la entrega de renglones económicos vitales a los monopolios foráneos, invirtiendo las prestaciones de los empleados en algunas accioncitas?

La propia lucha contra esas medidas demanda de un permanente debate contra tales sectores, que aun aliados, adoptan un enfoque que confunde a las masas populares y que no contribuye a la educación de los sectores vacilantes, como la burguesía que tiene contradicciones con el Alca. La pelea contra éste se comprometerá gravemente si se adoptan puntos de vista como los de la “inserción positiva” en la globalización, o los que señalan que hay es que negociar bien, o que ante la inevitabilidad del acuerdo internacional se deben buscar algunos paliativos.

Con respecto al Referendo, muchos de los integrantes de la Gran Coalición Democrática por la Abstención se afanan por aclarar que no hubieran tenido problema en contribuir con él si el cuestionario no contuviera algunos de los puntos fiscales que más claramente rechazan las bases afectadas. Incluso no tienen empacho en aceptar el infundio imperialista que ubica en el déficit fiscal los males del país, como si este no tuviera su origen en la exacción que cierne sobre Colombia la ruinosa deuda externa. En cuanto a los cambios políticos planteados para la consulta del 25 de octubre, varios de los miembros de la Gran Coalición aprobaron en el Congreso aspectos esenciales de la ley de reforma política que estableció casi todas las medidas antidemocráticas que Uribe espera ratificar en su consulta.

No cabe duda de que para enfrentar estas peleas se debe procurar un amplio acuerdo, incluso con las planas mayores de las centrales, pero eso no debe suponer ni por asomo que se aplique el apaciguamiento frente a sus avilantes; por el contrario, denunciarlas denodadamente en las juntas directivas y, principalmente, entre las bases, es una condición imprescindible para ganar a las mayorías, incluidos los sectores atrasados e intermedios. Sólo así se logrará impedir que la posible deserción de dichas planas —que ha efectuado algunas acciones contra el Alca y el Referendo— hacia posiciones colaboracionistas como las que ya está promoviendo el Polo Democrático Independiente,³⁷ del cual hacen parte varios de los principales sindicalistas del país, le aseste golpes de consideración al desarrollo de la lucha

III

EL MAL EJEMPLO CUNDE

El conflicto en Ecopetrol

El pasado 3 de septiembre, el compañero Rodolfo Gutiérrez renunció a la presidencia de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, USO, para la cual había sido elegido en agosto de 2002. En carta dirigida a la Junta Directiva Nacional, explicó:

“Es imposible presidir el sindicato después de perder en Junta y Asamblea, la votación por nuestra propuesta de no aceptar rebajas en la Convención, rechazar las medidas de privatización echadas a andar por URIBE Y YANOVICH y exigir una solución a la estabilidad del sindicato. Propusimos realizar la Huelga General como única salida ante la brutal embestida gubernamental contra la empresa, nuestros derechos y el sindicato”.³⁸

Antes, el 28 de agosto de este año, el MOIR había emitido una declaración pública titulada “El conflicto en Ecopetrol”, en la que señalaba que el 14 de agosto la Junta Directiva Nacional había resuelto mayoritariamente “aceptar una exigencia patronal que hasta esa fecha el sindicato había

³⁷ En la Plataforma Política del Polo Democrático Independiente se consignó que ese partido le servirá de calanchín a Estados Unidos para que se acepte su tratado recolonizador: “*Desplegaremos todas las acciones necesarias para que el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, ALCA, sea equilibrado y se apruebe la creación de un Fondo de Compensación Americano, que mitigue los efectos sociales y económicos negativos del acuerdo comercial en las diversas regiones de América*”. Ver dicha Plataforma en www.vialterna.com.co

³⁸ *Carta de renuncia a la presidencia de la USO ante la decisión mayoritaria de negociar el contrapliego patronal*, Bogotá, 3 de septiembre de 2003. En www.moir.org.co

justamente rechazado: entrar a negociar los puntos del contrapligo presentado por la empresa”, lo que el Partido consideró como un cambio en la posición que “durante nueve meses permitió resistir con éxito la ofensiva desatada contra Ecopetrol y la Convención de los trabajadores”.

En dicho comunicado, los militantes del MOIR acotaban que la táctica aplicada por la USO, entre noviembre de 2002 y agosto de 2003, fue firme, madura y flexible, tanto que se llegó hasta

“reducir el pliego a las aspiraciones mínimas y aceptar negociación en asuntos puntuales que, aunque estaban enunciados en el contrapligo, el sindicato no tenía mayor impedimento en abordarlos, como eran la definición de las actividades de la industria del petróleo (Arts. 2 y 3 CCTV) y lo relacionado con las condiciones de seguridad social para los trabajadores nuevos. En esta propuesta se preservan rigurosamente los puntos de política petrolera que se contraponen de hecho a los contenidos del decreto 1760, tal paso táctico fue aprobado por la Asamblea Nacional de Delegados extraordinaria, realizada los días 17 y 18 de junio de 2003”.

Asimismo, los cuadros partidarios denunciaron que el gobierno replicó con “un portazo”, por lo cual

“la respuesta consecuente con los intereses de la nación, el sindicato y los trabajadores era realizar la huelga general en Ecopetrol”.

Finalmente, se le echaba en cara a la actual mayoría el alimentar

“la perniciosa postura de la corriente sindical que clama por la conciliación y el acomodamiento ante el avasallador embate de las políticas del imperialismo que sumisamente aplica Uribe”.³⁹

Resaltemos de una vez que en los dos documentos, la renuncia del camarada Rodolfo Gutiérrez y la declaración pública de la militancia partidaria con puestos directivos en la USO, salta a la vista una contradicción: inicialmente sostienen que perdimos la votación frente a “no aceptar rebajas en la Convención” y que la Junta Directiva aprobó lo que “hasta esa fecha [14 de agosto de 2003] el sindicato había justamente rechazado: entrar a negociar los puntos del contrapligo”, para luego afirmar, como quien no quiere la cosa, que en gracia a la táctica “firme” “madura” y “flexible” se había aceptado la negociación del contrapligo en “asuntos puntuales”. Ni más ni menos que en “la definición de las actividades de la industria del petróleo”⁴⁰ y “las condiciones de seguridad social para los trabajadores nuevos”.

Con no poca aprensión los firmantes de esta carta nos adentramos en el examen de los sucesos que tienen, hasta ahora, el final resumido en los párrafos anteriores. Se trata de entablar un debate sobre la actuación de nuestro Partido en el sindicato que tiene quizás la tradición más revolucionaria en el movimiento obrero colombiano. La controversia que venimos sosteniendo con la dirección del Partido ha llegado a su punto más alto, ya que hemos planteado que sus orientaciones en esta materia han sido profundamente erróneas y de consecuencias gravísimas.

Que el MOIR, con un equipo de militantes probados, llegara a la presidencia de la USO—principal obstáculo contra la imposición de las determinaciones oficiales—aparecía como una ventaja para

³⁹ *El conflicto en Ecopetrol*, Barrancabermeja, 28 de agosto de 2003. En www.moir.org.co

⁴⁰ Este punto es de importancia cardinal en el contrapligo ya que se refiere a la exigencia de la empresa de que, contra las estipulaciones convencionales, Ecopetrol pueda contratar con terceros actividades propias de la industria petrolera. Se trata de entregarles a contratistas, principalmente internacionales, procesos productivos que son inseparables de las áreas de exploración, explotación, refinación y transporte, que son las fundamentales del negocio petrolero.

enfrentar la arremetida previsible de Uribe contra Ecopetrol, los trabajadores y el sindicato. Con este trasfondo, la convención colectiva de trabajo 2003-2004 se anunciaba como la coyuntura para un combate trascendental. Pronto se perfiló un agudo enfrentamiento. El sindicato se aprestó: entre los días 13 y 16 de noviembre de 2002 efectuó la VI Asamblea Nacional, en la que expidió la Declaración de Fusagasugá, que describió las circunstancias que vivía la empresa, en los siguientes términos:

“A Ecopetrol le han hecho una ofensiva para quitarle el carácter de empresa estatal petrolera negándole su autonomía financiera y dejándole la exploración directa a las multinacionales, otorgándoles mayores beneficios en los contratos de asociación. La producción directa se entrega a los privados a través del contrato de crudo incremental. En refinación, proponen para el Plan Maestro de Cartagena, construir las plantas de servicios y tratamiento con capital privado. La petroquímica se ordena cederla al capital privado. Los oleoductos y centros de almacenamiento se ponen a disposición de los distribuidores mayoristas de combustibles, mercado vetado para Ecopetrol, a todo esto se le agrega una política de reducción de la nómina y el aumento de la contratación de las actividades propias, lo que hace expedita la privatización.”

Y en cuanto al plan de batalla, la Asamblea dispuso:

“Autorizar a la Junta Directiva Nacional para diseñar las estructuras y formas organizativas que sean necesarias para la realización de la **Huelga General** en toda la industria petrolera (resaltado en el original) y facultarla para declarar la hora cero cuando las circunstancias y el momento político sean convenientes, como respuesta a las políticas gubernamentales y las imposiciones del imperialismo y la banca multilateral, las reformas laboral y pensional, el contrapliego patronal, el tribunal de arbitramento y negociadores externos en la comisión de la Empresa y cualquier amenaza que atente contra la estabilidad de Ecopetrol como Empresa estatal”⁴¹.

El gobierno también desenfundó la espada. El 28 de noviembre, el presidente de la compañía, Isaac Yanovich, presentó ante el Ministerio del Trabajo la denuncia de la Convención Colectiva vigente, es decir, el contrapliego,

“para mostrar su desacuerdo con algunas de las condiciones previstas en la misma” y buscar “su modificación a través de un proceso de negociación”.⁴²

Se apuntaba básicamente a: contratar con terceros actividades propias de la industria petrolera; acabar la estabilidad laboral; variar las condiciones de salud y pensiones para los nuevos operarios y los jubilados; alterar el escalafón cambiando las condiciones de ascenso; modificar la relación con la USO para afectar su solidez, etcétera. Esto significaba arrasar cerca de la mitad de los 168 artículos de la Convención.

El mismo 28 de noviembre, el sindicato presentó su pliego de peticiones y exigió sentarse a negociar a partir del 5 de diciembre, sobre la base de que se levantara el veto impuesto al acceso de los dirigentes a los sitios de trabajo, se reintegrara a los despedidos y se retirara el contrapliego.⁴³

La apuesta quedó casada: el gobierno dispuesto a vencer a la USO y a arrasar los derechos adquiridos por los proletarios petroleros a lo largo de decenios, condición necesaria para cumplir su

⁴¹ *Frente Obrero, Declaración de Fusagasugá*, 16 de noviembre de 2002.

⁴² Presidencia de Ecopetrol, Comunicado oficial: *Declaración de la denuncia de la convención colectiva por parte de la administración de Ecopetrol*, 27 de noviembre de 2002.

⁴³ *Tribuna Roja*, n.º 90, *El conflicto en Ecopetrol, una batalla por la soberanía nacional*, por Roberto Smalbach, 10 de marzo de 2003.

propósito de entregar sin restricción alguna los hidrocarburos a las multinacionales, y la USO y el Partido en pie de lucha para derrotar esas pretensiones.

A tono con la gravedad de la situación, el 1º de diciembre de 2002, el Secretario General del MOIR, compañero Héctor Valencia, expidió una directiva nacional en la que expresaba:

“Uribe Vélez ha lanzado una ofensiva contra los derechos laborales y las conquistas pensionales y salariales de los trabajadores petroleros como parte de un plan que pretende abatir su organización, la Unión Sindical Obrera (USO), principal baluarte en la defensa de Ecopetrol, para poder así proceder a la entrega de esta empresa, patrimonio de los colombianos, a las multinacionales, especialmente las norteamericanas (...) Desde sus orígenes nuestro Partido ha participado en las luchas por sacar adelante los intereses tanto de esta empresa nacional como de sus obreros y hoy en día desempeñamos importantes cargos en la conducción de su organización sindical, los cuales nos exigen gran responsabilidad y plena consecuencia políticas (...) Todos los militantes deben adquirir una comprensión meridiana sobre los diversos aspectos envueltos en las medidas contra la USO y Ecopetrol (...) Se debe programar de inmediato la denuncia y condena entre todos los sectores sociales respecto a las medidas y propósitos del gobierno (...) En la ejecución de esta tarea debe empeñarse todo el Partido (...) No admite pausas y menos abandonos en su desarrollo y cumplimiento. Los militantes deben consultar con su organismo y los organismos con su respectivo organismo superior las formas (sic) y duración de los descansos propios de este mes y el entrante”.⁴⁴

Y en el informe a la Conferencia Nacional de La Mesa de los Santos, en enero de este año, se expresó en los siguientes términos perentorios:

“Tenemos un problema particular, que de todas formas algo tiene que ver con este problema del petróleo venezolano, y es la negociación de la USO. Un símbolo de lo agudo, ya lo dijimos, es la no presencia de Rodolfo aquí, es una idea de lo que está en juego. En esencia este es un pulso particular del MOIR con Uribe Vélez. Ahí están envueltas todas estas medidas aprobadas y las reivindicaciones de los derechos laborales de los trabajadores del petróleo. Tiene que ver con la toma del petróleo colombiano por el imperialismo. Es la política de Uribe Vélez de entregarle la empresa a las multinacionales. Ese es el problema central y no la cuestión de los derechos de los trabajadores, que es altamente importante. El problema que tenemos es cómo buscamos fuerzas de apoyo en esta pelea. Si se plantea mal, queda como una reivindicación más de estos ‘oligarcas de overol’, como llama esta burguesía a los trabajadores petroleros. Una pelea mezquina por los privilegios de los petroleros. El problema es la empresa y el petróleo”.⁴⁵

De las palabras a los hechos

A pesar de las directrices de batalla, se empezó trastabillando. ¡Quién lo creyera! El 18 de diciembre, en una reunión a la que asistieron, además de la empresa y la USO, Carlos Rodríguez, a quien la CUT nombró como asesor, y el ministro de Minas y Energía, Luis Ernesto Mejía, se acordó el inicio de la negociación para el 13 de enero de 2003, en las siguientes condiciones:

“La USO llevará a este escenario el pliego de peticiones y de igual manera, **la empresa llevará a este escenario, la denuncia de la Convención Colectiva** que realizó en los términos señalados en la ley”.⁴⁶

La junta directiva de la USO no comunicó con claridad a sus bases que el acuerdo para comenzar la negociación incluía poner sobre la mesa pliego y contrapliego. Al Partido tampoco se le dieron a

⁴⁴ Directiva nacional del Secretario General del MOIR, Héctor Valencia, 1º de diciembre de 2002.

⁴⁵ Conferencia Nacional de La Mesa de los Santos (20-24 de enero de 2003), informe del Comité Ejecutivo Central del MOIR, presentado por Héctor Valencia, Secretario General.

⁴⁶ Acta de Reunión entre la administración de Ecopetrol y la dirigencia sindical, 18 de diciembre de 2002.

conocer a derechas los términos infaustos de este primer arreglo; en cambio, se empezó a informar sesgadamente o a ocultar, haciendo caso omiso de la trayectoria de rigor atesorada por el MOIR. Todavía en *Tribuna Roja* n.º 92 se refieren los hechos de la siguiente manera:

“Ante las multitudinarias protestas en Cartagena, Barranca y otros centros de producción, [por el despido de 11 trabajadores de la refinería de la Heroica] Yanovich prohibió el ingreso a las instalaciones, restricción que mantuvo hasta el 20 de diciembre, cuando la USO, en la primera reunión con el presidente Uribe, consiguió levantar el veto y establecer las condiciones para instalar la negociación. **La USO dejó en claro que no aceptaba el contrapliego** y que se proponía defender el carácter estatal de Ecopetrol, como también la convención y los derechos sindicales”.⁴⁷

Evidentemente, no es lo mismo decir que el acuerdo incluía que “la empresa llevará a este escenario [la mesa de negociación] la denuncia de la Convención Colectiva” que afirmar que en la reunión con Uribe “la USO dejó en claro que no aceptaba el contrapliego”. El 28 de enero del presente año, se firmó una nueva acta que contenía exactamente la misma fórmula mencionada anteriormente para viabilizar el inicio de la etapa de arreglo directo.⁴⁸

Por fin, el 10 de febrero, comenzaron las negociaciones, que se suspendieron cuando el gobierno anunció que había extendido al consorcio Chevron-Texaco la explotación del gas de la Guajira hasta el año 2016, siendo que aquel yacimiento debería revertir a la nación el 31 de diciembre de 2004. Ante tamaño asalto a la riqueza nacional, la USO, con justa indignación, se levantó de la mesa el 19 de febrero y realizó un paro de 24 horas el 21. La tropa arremetió con gases lacrimógenos, balas de goma y disparos contra los trabajadores e impidió el ingreso de los dirigentes sindicales a la refinería. La brutal represión dejó un saldo de 9 heridos y 18 detenidos en Barrancabermeja y el gobierno desalojó las instalaciones. Luego de algunos acuerdos, que incluían el levantamiento de la prohibición que pesaba sobre los directivos del sindicato, las partes retornaron a la mesa, el 1º de marzo.

El viernes 21 de marzo concluyó la etapa de arreglo directo sin que se hubiera logrado ningún acuerdo. El 25, el gobierno mediante Resolución 0382, del Ministerio de la Protección Social, convocó el tribunal de arbitramento que, desde esa fecha, ha pendido como espada de Damocles sobre el petitorio. Ese mismo día, el sindicato reafirmó su voluntad de negociar directamente y reiteró que desarrollaría la huelga general con parálisis de la producción si el gobierno se obstinaba en imponer el tribunal.⁴⁹

Durante los meses transcurridos desde la VI Asamblea, la propaganda y la agitación sindicales lograron despertar simpatía en vastos sectores. Se desató un excelente ánimo de lucha no sólo de los trabajadores “convencionales”, como ha sido tradicional, sino de muchísimos de los empleados de la nómina directiva, hasta tal punto que un importante número solicitó ser aceptado en la USO. Por fuera de la empresa, el Frente Patriótico por la Salvación de Ecopetrol, propuesto por la organización sindical, comenzó a tomar fuerza. De los pronunciamientos a favor de la USO merecen destacarse el de la Iglesia —emitido el mismo día en el cual el gobierno convocó el tribunal de

⁴⁷ *Tribuna Roja* n.º 92, *La USO en la defensa del interés nacional*, por Roberto Smalbach, 6 de agosto de 2003.

⁴⁸ Anexamos copia de las dos actas mencionadas.

⁴⁹ *Tribuna Roja* n.º 92, *La USO en la defensa del interés nacional*, por Roberto Smalbach, 6 de agosto de 2003.

arbitramento⁵⁰—, los de las autoridades y sectores políticos y económicos del puerto petrolero y los realizados por un importante núcleo de parlamentarios, en lo cual jugó un papel clave el compañero Robledo. La convocatoria al “Encuentro Internacional de Solidaridad con la USO”, citado para los días 28 y 29 de mayo, fue suscrita por todas las centrales sindicales y un sinnúmero de otras organizaciones.

Una especie de limbo se mantuvo hasta el 10 de junio, cuando al tortuoso desarrollo de la negociación habría de agregársele un elemento agravante. Entre incrédulo y asombrado, el país supo, por una extraña filtración, que prevalido de las facultades concedidas por la ley 790 del 27 de diciembre de 2002, Uribe se proponía asestarle un golpe mortal a Ecopetrol. Ese 10 de junio se conocieron dos proyectos de decreto: uno, “Por el cual se escinde la Empresa Colombiana de Petróleos - Ecopetrol, y se crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos”, y otro, “Por el cual se modifica la estructura orgánica de la Empresa Colombiana de Petróleos – Ecopetrol”.

El matutino *El Tiempo* registró concisamente lo que ocurriría si los “borradores” se pasaran a limpio:

“En palabras de una fuente en la empresa, que prefirió mantener el anonimato, se buscaría el marchitamiento de la petrolera estatal ya que se le quitaría la carne del negocio”.

Y citando al vicepresidente de la USO, Gabriel Alvis, expresó que

“dividir a Ecopetrol sería el mayor descalabro económico de los últimos 50 años (...) podría pasar lo mismo que en la Caja Agraria, es decir que ‘nos acostariamos como empleados y amaneceríamos en el limbo’”.

Alvis concluyó:

“Ante una determinación como esta, a los trabajadores no nos queda otra salida que la huelga”.⁵¹

¿Cuál era el contenido de los proyectos? En la declaración que expidieron conjuntamente el presidente encargado de la CUT Fabio Arias y el presidente de la USO Rodolfo Gutiérrez se dieron las primeras puntadas sobre su verdadero significado:

“Ecopetrol será convertida en una sociedad anónima y le será arrebatado el control y explotación de las reservas de crudo y gas (...) Ecopetrol S.A., empresa de carácter mixto, sería puesta en condiciones de competencia con las compañías privadas en todas las actividades de la industria, sometida a la tramitología de la licitación, y perdería además la ventaja que hoy tiene de ser dueña de los hidrocarburos (...) Se abriría

⁵⁰ Del pronunciamiento eclesástico, firmado por monseñor Jaime Prieto Amaya, obispo de Barrancabermeja, extraemos los siguientes apartes que muestran su valerosa posición: *“Al borde de la determinación de la USO de declarar la huelga nos sorprenden los esfuerzos tan débiles y limitados al interior de la Empresa y del mismo Gobierno para evitar tal determinación (...) Coincidimos con la necesidad de mantener en ECOPETROL su estatus de empresa del Estado apuntando así con su eficiencia y productividad al mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de los hermanos más pobres (...) Reconocemos el papel importante que la USO ha jugado en el campo sindical en el país y su influencia positiva en la creación de diferentes formas organizativas especialmente dentro del sector popular, en particular en Barrancabermeja (...) Consideramos que los logros en materia estrictamente laboral por parte de la USO para los trabajadores de ECOPETROL los colocan en un plano altamente deseable para el mundo del trabajo. No por ello los debemos catalogar de “privilegios” (...) Creemos con firmeza que la USO está preparada suficientemente para abrir nuevos campos reivindicativos especialmente en relación con la política petrolera aportando así al país institucionalmente planteamientos e iniciativas serias y concretas que deben tenerse en cuenta en el panorama general”.*

⁵¹ *El Tiempo, Revuelo en Ecopetrol*, 11 de junio de 2003.

una nueva planta de personal, nuevo régimen prestacional y una administración que empezaría a obedecer a su composición accionaria, en la perspectiva de la privatización total (...) A la difícil situación originada por el contrapligo patronal y la convocatoria a tribunal de arbitramento, se suma este pretendido zarpazo del gobierno neoliberal de Uribe contra el interés nacional. La USO, por lo tanto, reafirma su firme disposición de ir hasta la huelga general, si es preciso, por lograr la permanencia de Ecopetrol como patrimonio de los colombianos, preservar los derechos laborales y defender nuestra organización sindical (...) La arrogancia de Uribe Vélez y Yanovich están abocando a los trabajadores petroleros a adelantar la realización de la huelga”.⁵²

La reacción fue tal que *El Tiempo* informó de la siguiente manera: “Revuelo en Ecopetrol”, “Proyecto para dividir la entidad levantó ampolla”, el “revuelo” “obligó al ministro de Minas y Energía, Luis Ernesto Mejía, a afirmar públicamente que, si bien existía la propuesta, esta no tenía el aval del presidente Álvaro Uribe”, el mismo funcionario “insistió en que la naturaleza jurídica de Ecopetrol, una empresa industrial y comercial del Estado, no cambiaría, siempre y cuando mantenga su viabilidad económica hacia el futuro”, y reafirmó: “Sí han existido propuestas que se están haciendo (sic) con motivo de la renovación del Estado pero esa propuesta no tiene validez”.⁵³ No se necesitaba mucha sagacidad para pensar que el ministro mentía, pues con respecto a Telecom el proceder oficial fue el mismo: negar públicamente el cierre de la empresa cuando se estaban redactando los decretos para liquidarla. El 26 de junio expidió el decreto 1760, que recogió prácticamente todo el contenido de los dos “borradores”.

Convertir Ecopetrol en un cascarón era una vieja pretensión imperialista, y la necesidad de enfrentar ese designio de la manera más radical, era también una acendrada convicción de los trabajadores petroleros. Éstos, ya en 1995, se habían lanzado a la conformación de un frente unido por la defensa de la estatal petrolera, con el fin de enfrentar la “reestructuración”, propuesta por las consultoras Booz Allen & Hamilton y Asesoría y Gestión Cía. Ltda., contratadas por el Ministerio de Minas y Energía y la administración de Ecopetrol. Antes del estudio, el sindicato se había visto precisado a declarar la huelga cuando el gobierno anunció que fragmentaría la empresa en las actividades de producción, refinación y petroquímica, transporte y comercialización.

En aquel entonces, los trabajadores señalaron que de lo que se trataba era de “perpetuar a través del Comité de Recursos Petroleros que proponen se mantenga por fuera del control de la empresa” las gabelas que el gobierno venía otorgándoles a las multinacionales y que tenían acogotada a Ecopetrol. Mencionaban además:

“Es este organismo el que definirá las políticas de manejo del recurso y la asignación de áreas de exploración, y ejercerá la función de clarificar las relaciones económicas del Estado con la Empresa (...) Este organismo será el verdadero rector de la Empresa y la política petrolera. Lo que antes discutían el Comité Ejecutivo, la Junta Directiva, y adonde llegaban las opiniones de los técnicos y profesionales, será concentrado en un equipo que está en el más alto nivel de la estructura. Ecopetrol pasa de ser dueña de las áreas sedimentarias a simple solicitante de asignaciones de tierra para exploración y explotación”.⁵⁴

⁵² Frente Obrero, *Uribe pretende dividir y privatizar la más importante empresa estatal de Colombia*, 12 de junio de 2003.

⁵³ *El Tiempo*, *Revuelo en Ecopetrol*, 11 de junio de 2003.

⁵⁴ Unión Sindical Obrera, USO; Asociación de Directivos de Ecopetrol, Adeco; Asociación de Trabajadores Temporales de Ecopetrol, ATTE, *La apertura económica y la privatización de Ecopetrol*, octubre de 1995, pág. 10.

Si de las citas anteriores se cambia el nombre de Comité de Recursos Petroleros por el de Agencia Nacional de Hidrocarburos, tendremos que los borradores de junio estaban inspirados en el estudio hecho casi una década atrás y que ni Samper ni Pastrana pudieron aplicar.

Retomemos los sucesos de 2003. El 10 de junio quedó claro que el gobierno se disponía a cavarle la tumba a la empresa estatal, ese era el contenido esencial de los proyectos de decretos. ¿Quién y para qué los había filtrado a la opinión pública? Quizás el gobierno mismo para medir la posible respuesta obrera y popular. Tal vez otra fuente. En lo que no podía haber duda era en que el contenido correspondía a un viejo anhelo de las multinacionales y, por supuesto, a la política oficial. Al parecer el altanero régimen de Uribe titubeaba, al tiempo que mentía, calculaba las fuerzas que podían desatarse contra su ominoso designio; no solo el Ministro de Minas y Energía afanoso negaba que los borradores fueran a convertirse en decreto, sino que la gran prensa culpaba a quienes habían dejado conocer los proyectos de reforma de haber echado a perder la estratagema. *El Tiempo* editorializó:

“La filtración a la prensa de la escisión de Ecopetrol en dos empresas dio al traste con la oportunidad que ofrece la ley de facultades al gobierno para reestructurar el Estado —próximas a vencerse— con el fin de meterle la mano a una entidad necesitada de profundos cambios. Para nadie es un secreto que el enorme potencial de esta empresa estatal se lo han devorado la burocracia y la ineficiencia. Quien hizo públicos los decretos que estaban ‘cocinados’ consiguió armar el alboroto que obligó al Gobierno a posponer la reestructuración de la petrolera. Y decimos posponer porque más temprano que tarde Ecopetrol tendrá que someterse a una delicada cirugía”.⁵⁵

Las facultades extraordinarias vencerían el 27 junio. ¡No había tiempo que perder, era obligatorio lanzarse a frenar el golpe, a impedir que el régimen convirtiera en decretos esos funestos proyectos! En medio de tanta adversidad había factores favorables para enfrentar esta batalla —no buscada por la USO, sino impuesta por los enemigos del país. La magnitud del atentado permitía que amplios sectores comprendieran a cabalidad la justeza en la lucha, puesto que, como en ningún otro momento, la contienda quedó perfilada alrededor de los más altos intereses de la nación: la defensa del petróleo y de Ecopetrol. Las bases de la USO habían demostrado con creces, mes tras mes, su disposición al combate y la junta directiva tenía carta blanca para declarar la hora cero. Además, para escamotear el petitorio, el gobierno había convocado, desde el 25 de marzo, el tribunal de arbitramento, y la intransigencia oficial cedería, si acaso, sólo ante hechos contundentes; los barranqueños se solidarizarían con la organización obrera, ya lo habían probado; la simpatía por la lucha de los petroleros abarcaba incluso a las autoridades eclesiásticas y civiles del Puerto y, en general, del departamento. No faltaban parlamentarios y personalidades democráticas dispuestos a respaldar a estos aguerridos proletarios; los trabajadores del resto del país, particularmente los estatales, golpeados una y otra vez, estaban expectantes frente a lo que decidiera la combativa USO; todo indicaba que la lucha ya no podría postergarse. Había llegado la hora de nona.

Pero el clarín proletario no atronó el espacio con la convocatoria a la batalla. A los encargados de tocarlo no les pareció que hubiera causa bastante. ¿Qué sucedió? ¿Acaso nadie vio los signos enormes de que se estaba ante el momento decisivo? Y el MOIR, la vanguardia obrera, ¿tampoco puso el oído en la tierra? ¿No tenía luego el Partido entre sus haberes enseñanzas sobre táctica, como la atesorada cuando, de la mano de Mosquera, al comienzo de la *apertura* se tomaron las decisiones que condujeron a librar el histórico combate contra la privatización de Telecom? ¿Dónde estaba el

⁵⁵ *El Tiempo*, No hay empresas intocables, 15 de junio de 2003.

camarada Valencia que no orientó a los militantes de la USO sobre el cambio cualitativo de la situación? Será acaso que él mismo, tan ufano sobre su sabiduría táctica, cuando le llegó la hora de demostrarla en la práctica, no tuvo en cuenta aquella referencia de Marx con la que instruyó al Partido en la Conferencia Obrera de 1995: “La fábula de aquel hombre que afirmaba ante una multitud haber dado un gran salto en la isla de Rodas. La gente que lo escuchaba le dijo: Rodas es aquí, salte aquí, baile aquí”.⁵⁶ ¿No le pareció que al “pulso particular del MOIR con Uribe Vélez”, notificado tan solemnemente en La Mesa de los Santos, le había llegado la hora? ¿O es que al MOIR se le quiere reducir a sólo “boca y atropellada”?, como el personaje de Borges, citado también en la Conferencia Obrera como ejemplo negativo y para llamar a los moiristas a ser diametralmente opuestos.

Dejemos consignado que la indecible vacilación fue captada por el gobierno, que decidió apretar el paso. El 26 de junio, un día antes de que vencieran las facultades, Uribe expidió el decreto 1760 en el cual recogió lo esencial de los dos famosos borradores.

¿En qué se ocuparon los dirigentes de la USO y los cuadros de nuestro Partido en ese frente, en tales días decisivos, en vez de aprestar a las masas para la batalla? Se distrajeron en “flexibilizar” el petitorio y en mostrarse dispuestos a negociar puntos del contrapliego, tales como los referidos a las actividades de la industria y los derechos de seguridad social de los trabajadores nuevos. ¿A qué propósito tamañas concesiones?, ¿a cambio de qué? Semejante yerro se cometió en la Asamblea Nacional Extraordinaria de Delegados, realizada tan sólo ocho días después de conocidas las disposiciones en elaboración que fragmentaban la empresa. Y de ese resbalón táctico se enorgullecen nuestros camaradas. Óigase bien: frente al designio de Uribe y el imperialismo de arrojar la empresa a su liquidación inevitable, la USO, como ejemplo de “firmeza”, “madurez” y “flexibilidad” no sólo decidió no pelear, sino que se sirvió de la ocasión para complacer al gobierno y defecionar puliendo fórmulas del contrapliego y sacando del cubilete que tal “paso táctico” preservaba rigurosamente “los puntos de política petrolera que se contraponen de hecho a los contenidos del decreto 1760”, que ni se había expedido por los días de tal Asamblea extraordinaria. Y pensar que en la declaración suscrita por la militancia del MOIR para criticar a las fuerzas de la USO que se disponen ahora a negociar la totalidad del contrapliego, se les recuerda que el cocodrilo hambriento no se conforma con las presas que se le arrojan sino que siempre querrá engullirse a quien lo alimenta.⁵⁷

Al parecer, otra resolución de la evasiva Asamblea del 17 y 18 de junio fue preparar un sesudo documento alternativo para presentárselo a Uribe, lo cual se hizo en efecto el 25 de junio, un día antes del decreto fatal. No pretendemos, ni más faltaba, negar la importancia que tienen los ensayos juiciosos sobre los problemas, pero momentos tienen las cosas. Para aquéllos en los que se imponen desenlaces críticos en la lucha de clases, como el que padecieron los petroleros, lo apropiado son las proclamas que infunden decisión y llaman a no detenerse ante ningún sacrificio en pos de la victoria, o a vender cara la derrota. Por el contrario, el extenso documento, que debió consumirles a los directivos de la USO y del Partido tiempo precioso, luego de explayarse en la historia de la aplicación de más de una década de apertura y neoliberalismo y de explicar, una vez más y detalladamente, la importancia de la estatal petrolera para el bienestar de la nación, y de dolerse de “que el país permita la liquidación de Ecopetrol”, concluye, con la cortesía debida, que:

⁵⁶ Conferencia Obrera Nacional, Informe de Héctor Valencia, Secretario General, Ediciones Tribuna Roja, Bogotá, abril de 1996. pág. 8.

⁵⁷ *El conflicto en Ecopetrol*, Barrancabermeja, 28 de agosto de 2003. En www.moir.org.co

“Por ello no compartimos y nos oponemos a la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y a la propuesta de cambiarle el carácter de empresa industrial y comercial del Estado por el de sociedad anónima”.⁵⁸

Enseguida, pasan a enumerar los 10 puntos que salvarían la empresa, en los que ni siquiera aparece uno que le exija al gobierno no expedir el decreto que ordena cavarle la fosa. Uribe acusó recibo de la muy detallada misiva y regocijado... estampó su rúbrica sobre el decreto 1760.

Cuando hemos preguntado por la responsabilidad del Partido en tan desastroso episodio, lo máximo que se atina a responder es que la declaración de la batalla no dependía del MOIR y se nos echa en cara una supuesta miopía que nos impide comprender que nuestra militancia es, evidentemente, una minoría dentro del sindicato. Respuesta insólita, ya que no fuimos los firmantes de esta carta quienes dijeron que este era un “pulso particular entre el MOIR y Uribe Vélez”. Además, ¿por qué se les achaca a las otras fuerzas la responsabilidad exclusiva de no haber declarado la huelga por esos días, siendo que el MOIR ni siquiera la planteó? Ese argumento sería válido si el Partido hubiera propuesto la hora cero y hubiera sido derrotado. Pero ¿acaso no seguíamos siendo la misma minoría cuando tomamos la decisión de abandonar los puestos de comando del sindicato? El interrogante se despacha aduciendo que la mayoría decidió llevar hasta las últimas consecuencias el “paso táctico” de la “flexibilización”, el cual, como ya vimos, el Partido ayudó a bruñir y practicó hasta la víspera del rompimiento, por lo que tiene una responsabilidad inexcusable en el desenlace. Camaradas, ¿por qué sí fue permisible romper cuando la suerte de la empresa ya estaba echada y no lo fue en lo más decisivo de todo el proceso, cuando nuestra determinación podría incluso haber tenido un efecto positivo sobre el ánimo de las otras fuerzas del sindicato? ¿Por qué en ese momento crucial, en vez de dedicarnos a hacer filigrana con el contrapliego, no propusimos el inicio inmediato de la huelga general? ¿Por qué se dejó pasar la oportunidad?

¿Se habían olvidado tan tempranamente las lecciones de los desatinos del marcelismo en la Caja Agraria? Recordemos. En junio de 1999, la dirección de Sintracreditario adoptó una táctica que desmovilizó a los trabajadores y le facilitó al gobierno el cierre de la entidad. Resumiendo esa experiencia, el MOIR criticó duramente la conducta de la jefatura sindical:

“Se corroboraban así los amenazantes anuncios que se venían lanzando contra esta empresa estatal y que habían llevado a que ya el 24 de febrero de 1999 se planteara abiertamente en reunión del Comité Ejecutivo que dirige al sindicato el debate sobre el camino a seguir. ¿Qué táctica adoptar? El MOIR, por conducto de sus dos únicos militantes que integran dicho Comité, insistió en que debían darse de inmediato pasos concretos en preparación para el inminente enfrentamiento, empezando por alertar a los trabajadores y ponerlos en pie de lucha. Por el contrario, la mayoría de dicho Comité Ejecutivo, siguiendo a su presidente, Jesús Bernal Amorocho, y a pesar de conocer los nefastos alcances de los anuncios gubernamentales, optó por una táctica que sumía en la pasividad a los trabajadores al no advertirlos plenamente sobre lo que el gobierno estaba tramando y rehuir la movilización. **Y pese a que la Junta Directiva Nacional, reunida en abril de 1999, aprobó una táctica de movilización, ésta nunca se impulsó consecuentemente**”.

“(…) Ocho mil trabajadores se preguntan: si ya se sabía que la Caja iba a ser clausurada, **¿por qué los dirigentes sindicales presididos por Bernal le dejaron la iniciativa a Pastrana, quien no dudó en proceder contra la institución y los trabajadores corriendo naturalmente con todos los costos políticos reaccionarios, mientras ellos cayeron en la pusilanimidad y se encogieron sin correr con los costos políticos progresistas y democráticos de la lucha sindical, y mucho menos con los costos políticos revolucionarios de la lucha obrera? (...) aquí lo que se tiene que responder es por qué la dirección del sindicato, ante la decisión gubernamental de liquidar la Caja Agraria, manifestada**

⁵⁸ Junta Directiva Nacional Unión Sindical Obrera, USO, Carta a Álvaro Uribe Vélez, 25 de junio de 2003.

en ingentes hechos y declaraciones, le escurrió el bulto a la preparación y realización oportunas de la huelga. Máxime cuando con esa actitud medrosa incurrió en un costo político mayor e irreparable: dejar a los trabajadores inermes ante los embates de sus enemigos”.⁵⁹

¿Por qué cuando el marcelismo en la Caja Agraria dejó escapar el momento oportuno para la huelga fue “pusilanimidad”, “escurrir el bulto” y “actitud medrosa” que acarrió un alto e irreparable costo político al “dejar a los trabajadores inermes ante los embates de sus enemigos”, mientras que en el caso de Ecopetrol es “sabiduría táctica”? Qué contraste: en Sintracreditario “el MOIR, por conducto de sus dos únicos militantes que integran dicho comité, insistió en que debían darse de inmediato pasos concretos en preparación para el inminente enfrentamiento (...)”. En la USO no podíamos proponer la hora cero en el momento oportuno por ser una minoría.

A causa de estas vacilaciones, el gobierno pudo firmar el decreto 1760 sin enfrentar una huelga en la industria petrolera. La gravedad de dicha disposición se explicó de manera precisa en el comunicado de la Junta Directiva Nacional de la USO, expedido el 27 de junio pasado:

“Al mejor estilo de la mafia que ultima a sus víctimas con el tiro de gracia, el gobierno de Uribe Vélez le acaba de dar ese golpe a Ecopetrol mediante el decreto n.º 1760 (...) Ecopetrol tal como quedó tiene los días contados. Esta empresa ya no es patrimonio de los colombianos, porque sus acciones quedaron en manos del Ministerio de Hacienda —léase agente del FMI— (...) Estas reservas [800 millones de barriles] se agotarán en 3 años a una rata de consumo anual de 250 millones de barriles de petróleo y pare de contar (...) Tendrá unas refinerías abandonadas (...) Le dejan unos oleoductos y poliductos abiertos a la competencia de las multinacionales (...) Estas nuevas condiciones hacen que Ecopetrol S.A. sea un remedo de empresa. Entre tanto, a las multinacionales les quedó la banda ancha de la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, una especie de asociación entre el gobierno y las compañías extranjeras, que dispondrán de la información geológica de la litoteca, el banco de tierras disponibles para su inversión y los servicios oficiosos de los 70 burócratas que manejarán la agencia y que se disponen a regresar la legislación petrolera al viejo sistema de concesión que ha venido exigiendo la embajada norteamericana en Colombia (...) Son hechos graves para la soberanía de la nación, que tienen que ser rechazados con energía y contundencia. En consecuencia la USO se ha declarado en Asamblea Permanente de Resistencia Patriótica y Dignidad en todo el país (...) En la constitución de Ecopetrol S.A. le quitan de tajo a la otrora Ecopetrol 3,7 billones de pesos de su patrimonio. Esta empresa S.A. queda marginada del potencial de reservas del país (...) Y el problema de los trabajadores, cuyos contratos de trabajo y condiciones laborales están a discrecionalidad del presidente de la empresa, el señor Yanovich, personaje que ejerce su odio de clase demencial hacia los obreros. Nada está garantizado, todo queda en la incertidumbre hasta que la primera asamblea de accionistas, máxima autoridad de Ecopetrol S.A., defina las condiciones y carácter de sus trabajadores”.⁶⁰

El anterior análisis se fue cambiando, seguramente bajo los apremios de quienes preguntaban por qué no se declaró la huelga. En *Tribuna Roja* del 6 de agosto se presentaron las cosas de esta manera:

“El 26 de junio, con los fusiles como escudo, Uribe se apresuró a expedir el decreto 1760, que le quita a Ecopetrol el manejo de los hidrocarburos, la convierte en una sociedad anónima y crea una promotora de energía, dejando a la otrora empresa estatal en un estado de debilidad tal que su futuro ha quedado sumido en la incertidumbre. Sin embargo, como producto de la presión que adelantaron los trabajadores, el decreto 1760 no solo no liquidó a Ecopetrol, sino que dio continuidad a los contratos de trabajo y a la convención colectiva”.⁶¹

⁵⁹ *Tribuna Roja*, n.º 78, *Aprestar siempre a la lucha contra las políticas imperialistas*, 20 de agosto de 1999.

⁶⁰ Junta Directiva Nacional Unión Sindical Obrera, USO, *Uribe da golpe de gracia a Ecopetrol*, Barrancabermeja, 27 de junio de 2003.

Ya no se trata de que el decreto sea un “tiro de gracia” contra la estatal petrolera, que la deja con los “días contados”, que la convierte en un “remedo de empresa”. Por el contrario, ahora no solamente no fue liquidada, sino que se asegura que los contratos de trabajo y la convención colectiva no sufrieron mengua, cuando antes se había advertido que “todo queda en la incertidumbre hasta la primera asamblea de accionistas” y que sus contratos y condiciones quedaban a discreción de Yanovich. No es honesto con los trabajadores y el pueblo que ahora se trate de minimizar el golpe, que sólo unos días atrás se denunciaba, justamente, como el más infame atentado contra la nación, la empresa y los trabajadores.

Desdichadamente, el Partido falló no solo en la defensa de la empresa. También se equivocó en el tema “altamente importante”, como lo calificara el compañero Valencia, de los derechos de los trabajadores. Aparte de las actas ya citadas del comienzo de la negociación y de los sucesos de la Asamblea extraordinaria, citemos otros documentos que confirman nuestras aseveraciones.

En una entrevista aparecida en *El Nuevo Siglo* del 30 de junio, Julio Roberto Gómez, presidente de la CGTD, muestra el triste papel jugado por la dirigencia sindical. Como lo hacían Tulio Cuevas y José Raquel Mercado, los ilusos jefes sindicales en vez de preparar la batalla, acudieron sumisos a la Casa de Nariño el día 25 de junio, la misma semana en que se le vencían al presidente las facultades extraordinarias. Preguntado Gómez sobre qué había sucedido en las conversaciones con el gobierno en el caso de Ecopetrol, contestó:

“Miramos la situación atinente a Telecom, a Ecopetrol y al seguro Social y aunque se acordó analizar los decretos de escisión de estas dos últimas empresas, el gobierno hizo todo lo contrario (...) Lo mismo que con el Seguro, no se respetó lo acordado, el gobierno se comprometió a que se iba a revisar con la USO lo atinente a la creación de una agencia para la exploración, garantizando que será estatal (...) Colateralmente el presidente planteó el reinicio de la negociación del pliego de peticiones de la USO para mañana en la perspectiva de lograr un acuerdo lo más rápidamente posible”.⁶²

He ahí los frutos de la concertación, de la no-confrontación: los burócratas sindicales, en vez de oponerse enérgicamente a las disposiciones lesivas, van a “analizar”, a mendigar que se les permita meter mano en algún inciso. Luego salen a quejarse del engaño del gobierno. Vergüenza grande que el MOIR hubiera participado en el sainete de la Casa de Nariño.

Para completar la burla, la Junta Directiva Nacional de la USO expidió, el 26 de junio, un comunicado en el que contaba a los trabajadores que estaba preparando con las centrales obreras la realización de un paro cívico nacional para antes de que vencieran las facultades del decreto 790, lo que ocurriría el 27 de junio, es decir, el día siguiente.⁶³

⁶¹ *Tribuna Roja* n.º 92, *La USO en la defensa del interés nacional*, por Roberto Smalbach, 6 de agosto de 2003.

⁶² *El Nuevo Siglo*, *Gobierno nos escamoteó: Centrales*, 30 de junio de 2003.

⁶³ Veamos lo que informó la Junta Directiva Nacional de la USO al respecto: “*Así mismo valoramos el compromiso asumido por las centrales obreras y la comunidad en Bogotá al asistir a la audiencia pública realizada en la plaza de Bolívar. Estas actividades serán realizadas en todas las ciudades y pueblos donde Ecopetrol o la USO hacemos presencia, como preparación para salir al gran paro cívico nacional, antes que terminen las facultades especiales de la Ley 790 el 27 de junio de 2003, si el gobierno insiste en la aplicación de su nefasta política liquidacionista y privatizadora del patrimonio nacional.* (En negrillas en el original). *Frente Obrero, Persiste la decisión del gobierno*, 26 de junio de 2003.

El 1º de julio, una comisión especial de la USO, integrada por los compañeros Rodolfo Gutiérrez, Daniel Rico y Gabriel Alvis, que se reunió con el presidente de Ecopetrol, expresó lo que en realidad se proponían:

“Que el sindicato fijó la posición política frente al decreto 1760, por medio del cual se transformó a Ecopetrol, argumentamos con certeza que esta maniobra neoliberal, hace parte de la estrategia de debilitar, marchitar y privatizar a las empresas estatales, de tal manera que posteriormente, recaiga todo el peso de la crisis sobre los costos laborales y las convenciones colectivas de trabajo”.

Se limitó, pues, la comisión de los sindicalistas a caracterizar el decreto de marras, pero en otro punto, se consolaba con que:

“No obstante también existe la voluntad de abrir la negociación, para lo cual se plantea que se instalen las dos mesas de conversaciones el próximo miércoles 2 de julio, una que discutirá el Pliego de Peticiones y la otra **los temas contenidos en la denuncia** y la estabilidad del sindicato”.⁶⁴

No había tal paro cívico para fecha próxima. Lo que se había acordado era reanudar las conversaciones sobre pliego y contrapligo, cosa que ocurrió a partir del 15 de julio, cuando se autorizó el ingreso de los trabajadores convencionales a las refinerías, sobre la base de que el sindicato había manifestado públicamente su rechazo a cualquier atentado contra la infraestructura de la empresa o su personal.

El 29 de julio, la Comisión negociadora de la USO se dolía de la intransigencia oficial, que pretendía imponer todo el contrapligo. Según el boletín de esa fecha, el gobierno anunció que, por las restricciones presupuestales y fiscales, no habría aumento para ningún trabajador ni incremento en partidas como alimentación, transporte, primas, vacaciones y cualquiera que tuviera incidencia salarial. El gobierno, además, les notificó que las vacantes por jubilaciones no se llenarían y que las nuevas necesidades operacionales sólo se determinarían con base en el contrapligo, inclusive planteó una propuesta para golpear los fondos del sindicato. Sobre la política petrolera les señaló que esto era privativo del gobierno y que bajo ningún aspecto lo sometería a la mesa de negociación. Les dijo, además, que se debían eliminar los artículos 2 y 3 de la convención para contratar [con el sector privado] sin ninguna cortapisa las actividades de la industria y las que no lo son. Aún más, ese mismo día les anunció una revisión general de la prestación de los servicios de salud para incluir copagos, cuotas moderadoras, etcétera. Les presentó también la revisión de los puntos referentes a escalafón, con el propósito de establecer uno nuevo en el cual la empresa *motu proprio* definiera carreras, categorías, niveles, poli-funcionalidad, competencias, concursos, nivel de aporte, evaluación de desempeño.

Miremos el comentario de la dirección de la USO ante la arrogancia gubernamental:

“Esta fue la respuesta de la administración a la voluntad expresada por el Sindicato, mediante la centralización del pliego, para buscar una solución a las actividades y las condiciones de ingreso para los nuevos trabajadores en pensiones y salud”.⁶⁵

Nótese que la táctica consistió en hacer concesiones, una tras otra, con el vano propósito de aplacar al gobierno. No se enfrentaron los proyectos de decreto, tampoco hubo respuesta a la expedición del

⁶⁴ Junta Directiva Nacional Unión Sindical Obrera, USO, *Resultados de la reunión con la presidencia de Ecopetrol*, 1º de julio de 2003.

⁶⁵ Comisión Negociadora de la USO, *La empresa se niega a negociar el pliego de peticiones*, 29 de julio de 2003.

1760; en la medida en que el régimen comprendía que no habría huelga, que percibía irresolución, que avanzaba sin encontrar mayor resistencia, se endurecía, embestía resuelto. Por su parte, la USO retrocedía, ofrecía, se mostraba vacilante, se plegaba, se quejaba. Las concesiones del sindicato no lograron debilitar, sino fortalecer la posición del gobierno; no consiguieron vigorizar la respuesta obrera, sino minarla. Ceder en algunos aspectos secundarios para ganar aliados y acrecer la lucha por las banderas primordiales o sacrificar lo accesorio para preservar lo principal es una política revolucionaria acertada. Pero transigir en lo fundamental —en este caso la defensa de Ecopetrol y los derechos de los obreros— con la ilusión de calmar al enemigo es oportunismo. Ojalá que la dirección nacional del MOIR reflexione sobre las enseñanzas de los descalabros de su política apaciguadora. Política que si bien es novísima en nuestras filas, es tan antigua como la vacilación misma.

El 31 de julio, la Comisión Negociadora informaba que:

“El sindicato de manera seria y contundente, planteó los temas que no está dispuesto a negociar (...) Estabilidad consagrada en el artículo 121, el escalafón, la incidencia salarial de nuestras prestaciones, el subsidio familiar y los derechos del sindicato”.⁶⁶

En otras palabras, que estaba dispuesto a transar las actividades de la industria y la seguridad social de los nuevos. En otro boletín, la misma Comisión se quejaba de la “falta de reciprocidad por parte de la administración, quien continúa en la posición de negociar únicamente el contraplego”.⁶⁷ Es decir, la reciprocidad consistiría en que tuviera la bondad de negociar también el pliego.

¡A más concesiones de la parte obrera, más intransigencia de la patronal!

Después de lo dicho sobre este punto, sólo quienes comulguen con ruedas de molino podrán tragarse que la USO nunca negoció el contraplego antes de que el MOIR rompiera, supuestamente por esta razón. Es claro que se estaba buscando transar por lo menos dos aspectos del mismo: las actividades de la industria y los derechos de salud y pensiones de los trabajadores nuevos. Sobre éste último punto la inconsecuencia del Partido fue mayúscula, pues varias veces había condenado esos proceder es vitandos. Veamos:

En la ya mencionada declaración del 20 de enero de 2002 de la Comisión Obrera Nacional del MOIR, sobre la traición en el ISS, se señaló:

“Sin bastarles esta claudicación, los firmantes del acuerdo se arrogaron el derecho de decidir las condiciones de trabajo de los futuros empleados del ISS al determinar que a partir de la vigencia de la Convención se les aplicará el régimen general establecido en las leyes para los trabajadores oficiales, lo que significa que quedan por fuera de ella. **A riesgo de caer en una conducta patronal de concertación con las políticas del gobierno, equivalente a la traición, los actuales dirigentes de sindicatos y centrales obreras no tienen ningún título ni atribución para pactar menoscabos en las condiciones laborales y recortes salariales y pensionales en grave detrimento de los trabajadores del mañana.** Cuando tal aberración se presenta, como es el caso de lo acordado por la directiva del sindicato del ISS, a esos trabajadores no los obligan tan mezquinas componendas. Como históricamente se ha probado, los trabajadores solo reciben como legado de quienes los antecedieron las conquistas alcanzadas y la actitud de lucha para rechazar todo lo que niega sus derechos laborales y el justo valor de su fuerza de trabajo”.⁶⁸

⁶⁶ Comisión Negociadora de la USO, *Buscando la solución del conflicto*, 31 de julio de 2003.

⁶⁷ Comisión Negociadora de la USO, *Reunión con el ministro de Minas*, 1º de agosto de 2003.

⁶⁸ *Tribuna Roja* n.º 87, *El acuerdo en el ISS, una afrenta para los trabajadores y un oprobioso precedente para el movimiento obrero*, 13 de febrero de 2002.

Más recientemente, en la constancia de los tres miembros del Partido que hacen parte del Comité Ejecutivo de Fecode, ante la entrega de idénticos derechos de los maestros nuevos por los seguidores de Dussán y Avellaneda, se expuso:

“Los educadores nuevos deberían ser defendidos consecuentemente por Fecode y no ser convertidos en trofeos que históricamente se obsequian para justificar las políticas de conciliación y entrega con el régimen de turno. Alrededor de este consecuente criterio se generó una aguda contradicción cuando se discutía la aprobación de la ley 91 de 1989 que creó el Fondo Nacional de Prestaciones. En aquel entonces, la misma dirección política que hoy hace de las suyas en Fecode entregó la retroactividad de las cesantías y la pensión gracia para todos los maestros que se vincularan a partir del 1° de enero de 1990, en el primer caso, y para los que ya venían vinculados después del 1° de enero de 1981, en el segundo caso. Ahora rematan sus repudiables designios con la entrega del régimen especial en materia de pensiones para los nuevos maestros”.⁶⁹

Y en una declaración del 12 de junio de este año, firmada por militantes del Partido y miembros de otras tendencias políticas, todos pertenecientes a la Junta Nacional de Fecode, se afirmó sobre el mismo hecho reseñado arriba:

“Una vez más, los educadores nuevos son víctimas y comodines de la entrega y la traición. Ya había sucedido con la ley 91 de 1989, en virtud de la cual se perdieron, con el aval de la mayoría de Fecode en ese entonces, cuya composición política es la misma de ahora, la retroactividad de las cesantías y la pensión gracia. Hoy, doce años después, se entrega el régimen pensional de los maestros nuevos y se adelantan en 11 años en la entrega de la edad de pensión de las mujeres, al quedar establecido que esta será de 57 años a partir de la vigencia de la ley del Plan y no del 1° de enero del año 2014”.⁷⁰

Lo primero que cabe preguntarle al Comité Ejecutivo Central y a la Comisión Obrera Nacional del Partido es con base en qué criterios llegaron a la conclusión inaudita de que en Ecopetrol sí se pueden entregar los derechos pensionales y de salud de los trabajadores nuevos, mientras que en el Seguro Social y en el magisterio se había considerado ese mismo hecho como un acto de traición. Como pensamos que les debe quedar bastante complicado responder a esto, el Partido debería por lo menos autocriticarse francamente de la posición asumida en Ecopetrol.

¿Cómo puede considerarse el mismo proceder con dos enfoques diametralmente opuestos? Cuando es Sintraseguridad Social, se trata de “una conducta patronal (...) equivalente a la traición”; de una arbitrariedad de los “dirigentes de sindicatos y centrales obreras”; de una “aberración” a la que no tienen por qué someterse esos trabajadores que sólo reciben de sus antecesores las “conquistas alcanzadas y la actitud de lucha para rechazar todo lo que niegue sus derechos laborales y el justo valor de su fuerza de trabajo”. Ahora, si el desmán lo cometen los bonzos de Fecode, consiste ni más ni menos que en convertir a los nuevos educadores en “trofeos que históricamente se obsequian para justificar las políticas de conciliación y entrega”; en un “repudiable designio”; en volver a los noveles maestros “víctimas y comodines de la entrega y la traición”. Empero, si se trata de la USO, el mismo comportamiento es nada menos que un “paso táctico”, que demuestra “firmeza”, “madurez”, “flexibilidad”. Para decirlo con palabras de la Conferencia de La Mesa de Los Santos: “sabiduría táctica”.

⁶⁹ Constancia de los militantes del MOIR miembros del Comité Ejecutivo de Fecode, *La alianza socialdemócrata que dirige Fecode respalda la política de Uribe contra el magisterio colombiano*, Bogotá, 13 de mayo de 2003.

⁷⁰ Declaración ante la Junta Nacional de Fecode, Bogotá, 1° de junio de 2003.

Camaradas, déjenos recordarles que cuando se empiezan a ceder a cambio de nada y de buen grado las conquistas de los trabajadores, por más pequeñas que se quieran presentar —y en este caso no lo eran tanto— se abre una fisura al casco de la nave que, seguramente, terminará por hacerla naufragar. No plantear la huelga en el momento en que tocaba, prestarse a negociar el contrapligo patronal, dizque para no aislarse, para ganar a las otras fuerzas a la lucha: esos actos que lindan con la traición, caracterizan la táctica valencista que impera hoy en el Partido. Todo para resultar, en un acto digno de Poncio Pilatos, renunciando a los cargos directivos de la USO, “aislándose” de quienes quieren continuar con la táctica, que iniciara el propio MOIR, de ir aceptando el contrapligo. Así, el Partido se queda con el pecado y sin el género, gracias a la táctica inteligente de nuestro Secretario General.

IV

POSICIÓN REVOLUCIONARIA DEL PARTIDO

Los asalariados, los campesinos, las capas medias y la burguesía nacional constituyen mucho más del 90% de la población colombiana; su extraordinaria potencialidad consiste no sólo en su número sino también en ser el motor del progreso nacional. Dividir, atomizar estas fuerzas permite sojuzgarlas; la unidad hará posible que se emancipen. Sobre la necesidad de conformar un gran frente patriótico con esas clases y sectores sociales nunca ha habido dudas en el MOIR; por el contrario, la política de *apertura económica* hizo más apremiante llevar a cabo este cometido, en cuya dirección en los últimos años se ha avanzado gracias a que amplios sectores del campo han cerrado filas en defensa de la producción nacional, tarea en la que el MOIR ha cumplido un papel sobresaliente. Quienes hacían irrisión de la tesis mosquerista de que es posible reunir fuerzas con la burguesía nacional para repeler la agresión del imperialismo, han quedado en ridículo puesto que la globalización ha levantado manifestaciones de descontento de capas de empresarios rurales y urbanos en toda América Latina. Tampoco el Partido se había equivocado hasta ahora sobre cuáles son las causas primordiales de la división: es a los opresores gringos y a sus compinches colombianos a quienes conviene sembrar cizaña en las filas obreras y del pueblo, para lo cual infiltran en ellas quintacolumnistas, a quienes es necesario desenmascarar. En segundo término, han de enfrentarse las tendencias de ultra izquierda, que confunden el blanco y yerran en los métodos y, voluntaria o involuntariamente, contribuyen al fraccionamiento.

Francisco Mosquera, el más esclarecido impulsor de la unidad nacional, rechazó tajantemente la funesta pretensión de conjuntar las fuerzas del progreso con base en la conciliación con los traidores:

“Tales avances [la resistencia de la clase obrera a la dominación imperialista y los progresos en el ‘paso primordial’ de combatir y expulsar de sus filas a las camarillas de UTC y CTC] no se alcanzaron debido a las medidas represivas del régimen que conserva mucho de su iniciativa y capacidad de maniobra; pero no se alcanzaron sobre todo porque paralelamente surgió una contracorriente oportunista que, en su propósito de aniquilar al MOIR, elaboró la absurda teoría de que la división sindical obedecía no a la política de la reacción, ni a las actividades antinacionales y patronales de las directivas de UTC y CTC, sino a la presencia del movimiento independiente y revolucionario de los obreros colombianos. El MOIR no rehusó nunca esa lucha. Por el contrario ha denunciado siempre la conducta vil y despreciable de quienes de dientes afuera hablan de la unidad obrera y de hecho apoyan las tretas urdidas desde las cumbres gubernamentales para burlar las justas aspiraciones de las masas trabajadoras. Y todo eso sin importarle las temporales dificultades determinadas por una correlación de fuerzas desventajosa”.

Y más adelante, refiriéndose a la bancarrota en que habían entrado dichas camarillas:

“Ha quedado aplastada por el peso de los acontecimientos **la falsa teoría de que la conciliación con Cuevas y Mercado conducirá a la unidad de la clase obrera colombiana (...)**

“Combatir y aislar a las camarillas de UTC y CTC. He ahí uno de los deberes prioritarios de cualquier organización sindical consecuente. **Esta lucha es parte integrante de la que adelanta desde siempre y naturalmente la clase obrera para limpiar su casa de esquirols y traidores. Pura hipocresía serían las declamaciones de unidad si las palabras y las buenas intenciones no las acompañamos de una lucha enérgica, perseverante y a fondo contra los agentes patronales de la UTC y CTC, financiados y consentidos por las oligarquías colombianas y su amo imperialista**”.

Mosquera distinguió claramente entre los trabajadores de los sindicatos y centrales patronales y los vendeobrerros:

“El combate no es en ningún momento contra los sindicatos y los trabajadores de las dos centrales. Ellos son víctimas propiciatorias de la turbia política de éstas. Pero mientras las clases dominantes puedan contar con ambas centrales o aunque sea con una de las dos, echarán mano de ella y encontrarán formas gananciosas de urdir maquinaciones, sembrar el desconcierto e intrigar la división entre los obreros sindicalizados. Únicamente propiciando la desintegración progresiva de la UTC y CTC las masas trabajadoras estarán en posición ventajosa para desbaratar las maniobras de los explotadores y consolidar una confederación auténticamente suya y ciertamente poderosa”.⁷¹

La política de *Unidad y Combate*, que el Partido adelantó entre 1972 y 1975, también estuvo llena de ricas lecciones al respecto. Vale la pena traer a cuento que uno de los sucesos que contribuyeron a frustrar aquel esfuerzo unitario fue el papel de esquirolaje asumido por la CSTC, en un conflicto de los trabajadores bancarios, a comienzos de 1975:

“... Finalmente, recordemos la reciente experiencia del movimiento de los trabajadores bancarios, cuando la dirección de la CSTC ordenó levantar el paro nacional apoyando a unos cuantos esquirols que pretextaban haberse opuesto al paro indefinido. (...) [Este fue] El asunto más espinoso que dio origen a las insuperables contradicciones de un considerable sector sindical con la dirección de la CSTC, en vísperas del congreso unitario”.⁷²

La experiencia que siguió fue analizada por Francisco Mosquera en la Conferencia Nacional de 1981, en la que se saldaron cuentas con el recién expulsado grupo de los hermanos Ñáñez. Allí analizó:

“A raíz del rompimiento con el Partido Comunista Colombiano en la UNO y en la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, CSTC, comienzan a campear dentro del movimiento sindical una serie de acuerdos con el esquirolaje, donde éste impone las condiciones. Realmente, el triunfo temporal que obtienen estas fuerzas con la movilización en el paro cívico nacional de septiembre de 1977 le da sustento a esta tendencia. De allí que el acuerdo con las camarillas de la Unión de Trabajadores de Colombia, UTC, y de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, y la propaganda alrededor de otro eventual paro cívico, hayan dado para absolver las distintas villanías cometidas por los dirigentes de UTC y CTC.

“Han proliferado hechos cuyo oportunismo no tiene antecedentes, como el de condecorar con el ‘Galán obrero’ al ministro de Trabajo de turno; ver a los principales dirigentes de estas camarillas amarillas

⁷¹ *Tribuna Roja* n.º 9, *Algo más sobre la política de “Unidad y Combate”*, septiembre de 1973. En *MOIR Unidad y Combate*, Editor Tribuna Roja, 1976.

⁷² *Tribuna Roja* No. 15, *Los acuerdos y los virajes*. Bogotá, 10 de mayo de 1975, En *MOIR Unidad y Combate*, Editor Tribuna Roja, 1976.

tomando asiento en la dirección de los partidos tradicionales y participando en las elecciones como candidatos de esos partidos, y que eso no mueva a la crítica, es inaceptable. En otros tiempos, el movimiento revolucionario no dudaba en señalar eso como una traición.

“Ahora basta que se levante la consigna del segundo paro cívico nacional, y que se publique por enésima vez el mismo comunicado al respecto, para que se olviden todas las fechorías y felonías de los dirigentes sindicales. Apoyaron aspectos del Estatuto de Seguridad, pero eso también se les alcahuetea y se les absuelve porque siguen hablando del paro y porque así sostienen el aparato unitario del Consejo Nacional Sindical. Hay una especie de frenesí dentro de lo que se cataloga como movimiento revolucionario por apoyar esa unidad sin principios. Que yo recuerde, nunca en público un dirigente sindical había recibido del jefe del Estado el cheque oficial de su soborno como ocurrió en Pasto ante el aplauso de la tribuna. Pero eso no mueve a la menor observación crítica. Parece como si fuera algo absoluta y completamente normal; como si el salario de la traición hiciera parte de la táctica. Es continuar postrando la clase obrera en manos de sus principales verdugos”.⁷³

Las frases anteriores parecen pronunciadas para el momento presente en el que todas las bellaquerías se encubren con la engañifa de convocar eventuales paros cívicos y el pretexto de mantener la unidad sindical.

Como fruto de las felonías de la UTC y la CTC y de la denuncia implacable entre los trabajadores llevada a cabo por el Partido y por otros sectores consecuentes, estas centrales entraron en una bancarrota de la que jamás lograron recuperarse. Su lugar vino a ser ocupado por la CUT, creada en 1986.

La nueva central se gestó en las oficinas del Ministerio de Trabajo durante el gobierno de Belisario Betancur y a ella ingresaron la CSTC y el sector belisarista de lo que quedaba de la UTC, dirigido por el ex ministro Jorge Carrillo. Eran los días en los que el Partido había lanzado la política de Salvación Nacional, tiempos en los cuales hubo de combatir la corriente prosoviética que se instaló en la dirección de la CUT. El MOIR se vio precisado a adelantar una intensa lucha ideológica contra una tendencia que, además de su conciliación con el gobierno, se mostraba partidaria de “la voladura de los bienes productivos, la intimidación en las relaciones sindicales y el secuestro como medio de financiación”⁷⁴. Contra todo aquello, en 1988, sindicatos influidos por el MOIR junto con sectores democráticos desgajados de la UTC y la CTC organizaron la Confederación de Trabajadores Democráticos de Colombia, CTDC, que constituyó un polo de atracción patriótico para contrarrestar la nociva influencia de la CUT.

Entrados ya en el periodo de la *apertura*, que siguió al derrumbe del imperio soviético, la nueva central se amplió en 1992, al crearse la CGTD, surgida de la fusión entre la CTDC y la CGT. En el acto inaugural, Mosquera resumió así 25 años de experiencias en la pelea contra la tendencia amarillista:

“La fundación de la nueva central representa el último capítulo del prolongado proceso de lucha contra la decadencia de la corriente patronalista de la clase obrera.

⁷³ Francisco Mosquera, Informe ante la Conferencia Nacional del MOIR realizada en Bogotá los días 28 de febrero y 1º de marzo de 1981. En *Lecciones de táctica y de la lucha interna*. Ediciones Tribuna Roja, Bogotá, julio de 1997. págs. 22 y 23.

⁷⁴ Francisco Mosquera, *Saludo del MOIR en la fundación de la CTDC*, publicado en *El Tiempo*, el 14 de agosto de 1988. En *Resistencia Civil*, Editor Tribuna Roja, Bogotá, 1995, pág. 389.

“Las centrales controladas por la gran burguesía y por la disidencia revisionista plantearon siempre paros generales, a medida que se iban recortando los derechos de los trabajadores, pero, invariablemente también, o los suspendían, o los traicionaban.

“Siendo presidente del Bloque Sindical Independiente de Antioquia expuse, en 1967, que tales posiciones amarillas jamás tendrían respaldo dentro del proletariado colombiano. En 1969 se declaró un paro para el 22 de enero, y tras permanecer detenidos prácticamente 24 horas en la casa presidencial, los dirigentes sindicales de las aludidas agrupaciones se entregaron y aceptaron hasta la pena de muerte. A raíz de tales acontecimientos, la USO, la niña de mis ojos, se desafilió, si la memoria no me falla, tres veces de la CSTC, la confederación mamerta. Sin embargo, el gobierno, mediante las resoluciones de sus oficinas de trabajo la volvió a reclutar en las filas del revisionismo.

“Espero que con el cambio de la correlación de fuerzas que estamos celebrando logremos impedir, de hoy hacia el futuro, semejantes procedimientos ominosos.

“Debemos sobrepasar las fronteras de los ajetreos sindicales y poner los ingentes afanes de nuestra lucha a favor de la emancipación de los desposeídos de la ciudad y el campo. Hay un ejemplo hermoso, el de los trabajadores de Telecom, a quienes poco empeño les merecen las migajas ofrecidas ante los máximos intereses de la nación”.⁷⁵

Desdichadamente, en lugar de seguir el derrotero señalado por el paro de Telecom de abril de 1992, las cúpulas del movimiento sindical iniciaron otra etapa de claudicaciones y comenzaron a difundir las ideas del “sindicalismo sociopolítico”, con las que se ha aliñado la traición.

V

EL VIRAJE

Luego del prematuro fallecimiento de Francisco Mosquera, Héctor Valencia, ya en el cargo de Secretario General, mantuvo —*grosso modo*— la posición revolucionaria de combatir a los traidores, que luego alteró radicalmente, al formular la línea de unidad con ellos. Hasta el momento, los planteamientos más acabados de esta nueva posición son los expresados por él en la Conferencia Nacional del Partido de La Mesa de los Santos. Comparemos:

En el editorial de *Tribuna Roja* n.º 58, del 11 de marzo de 1995, intitulado “*Asalto social*” de Samper y el imperialismo, esbozó el problema en los siguientes términos categóricos:

“No se puede reducir entonces el asunto de los Obregón y compañía, que firmaron y bendijeron el “pacto social”, a una cuestión circunstancial, ni a meras discrepancias organizativas dentro del movimiento sindical. **Lo que realmente ocurre es que el imperialismo y la burguesía se han ganado o han comprado a una capa de los directivos sindicales para sacar adelante sus intereses financieros y esto constituye un hecho económico que sirve de base al ejercicio desvergonzado de una política burguesa y proimperialista dentro del movimiento obrero. En consecuencia, el proletariado ya no ha de considerar esa capa como un lastre que debe cargar en su marcha sino como un refuerzo adquirido por sus enemigos. Contra ella es necesario librar a fondo una lucha en el terreno económico y sindical, pero principalmente en la arena política e ideológica, la arena donde se decidirá la lid contra lo que ya el pueblo ha bautizado como ‘asalto social’ de Samper”.**⁷⁶

⁷⁵ Francisco Mosquera, *Resistencia Civil*. Pág. 463.

⁷⁶ *Tribuna Roja* n.º 58, “*Asalto social*” de Samper y el imperialismo, 11 de marzo de 1995.

Y en la Conferencia Obrera Nacional realizada el 11 de marzo de 1995, ratificó:

“Entre tantos problemas que guardan relación con la propaganda, existe uno que merece atención: **la denuncia de los vendeobreros incrustados entre los trabajadores.** Me refiero a los Obregón y compañía, quienes, como lo decimos en el editorial del último Tribuna, **deben ser señalados: no son gente que la clase obrera haya de soportar en sus filas,** cual si fuese gente equivocada con la que adelantamos una discusión más. No. Esta gente, que firmó el pacto social, **está en la orilla opuesta de la clase obrera. Son traidores de clase con mando burocrático y presentados por el gobierno como dirigentes obreros. Debemos iniciar contra ellos una lucha radical que incluya la denuncia de su traición,** pues firmar el pacto es aprobar el hambre para millones de colombianos. **Éste no es un asunto de unidad sindical ni pasa por criterios sobre las relaciones dentro de la CUT. Se trata de un problema de principios.**

El oportunismo, en palabras de Stalin, consiste en querer borrar las contradicciones de clase. Este concepto es válido dentro y fuera del Partido. **Con oportunistas peleamos a diario en el movimiento sindical, pero estos que estamos mencionando tienen una calidad negativa especial: son traidores. No puede ser que en Colombia se respalde la política central del imperialismo, de la que el pacto social es un meollo, y no haya quien lo denuncie. Esa denuncia la asume el MOIR como un deber. No somos mansos. Y no serlo establece una diferencia. Cuestiones que atañen a ese deber, camaradas, están por encima de otros intereses tácticos. Si nos acostumbramos a que esto suceda en el movimiento sindical sin que surja una voz acusadora, si no cumplimos con la propagación de la denuncia, nos convertiremos en cómplices de algo que degenera nuestra propia clase. Hay aberraciones que, si se dejan pasar una y otra vez, terminan instaurándose en el movimiento sindical y convirtiéndose en costumbre”.**⁷⁷

En el Pleno Nacional Informativo del 9 y 10 de mayo de 1998, al criticar la posición de Marcelo Torres, según la cual el Partido debía hacer una alianza con la llamada clase política por el sólo hecho de estar siendo desplazada de los cargos de control del Estado y a pesar de su actitud de entrega de los intereses nacionales, Valencia dijo:

“Estamos sufriendo las inconsecuencias y las traiciones de los principales dirigentes de las centrales obreras. Particularmente Julio Roberto Gómez, que nos está sacando de la CGTD con métodos fascistas. Pero esto pertenece a otro informe. **Dentro del movimiento obrero, frente a las inconsecuencias de estos dirigentes sindicales respecto a los intereses de la nación, ¿qué hacemos? Y ¿qué hacemos con esos integrantes del movimiento obrero que concilian con el imperialismo, que alcahuetean las privatizaciones? Y ese movimiento sí que es un baluarte. La actitud tiene que ser la de la crítica, frontal y abierta. Son traidores.** Eso lo dije desde la Conferencia Obrera Nacional de 1995. En ese momento era contra Obregón: y si hoy Garzón con su pacifismo grosero, va a embolatar la lucha antiimperialista de nuestro pueblo, se debe señalar como traidor, lo mismo que a Julio Roberto Gómez si hace otro tanto. **Estamos abocados a la lucha en el movimiento obrero. Vamos a librarla.** Ahora bien, si es así con el movimiento obrero que es el baluarte más importante ¿qué tal con la ‘clase política’?”.⁷⁸

En síntesis, la línea consistía en denunciar de manera “radical”, “abierto” y “franca” a los traidores, acusándolos de compartir la culpa de someter a millones de colombianos al hambre. Había que diferenciarlos de otra clase de oportunistas que no fuesen agentes del enemigo. Omitir el señalamiento

⁷⁷ Conferencia Obrera Nacional, Informe de Héctor Valencia, Secretario General, Ediciones Tribuna Roja, Bogotá, abril de 1996. pág. 28.

⁷⁸ Intervención de Héctor Valencia, Secretario General del MOIR, ante el Pleno Nacional Informativo del 9 y 10 de mayo de 1998.

de los principales vendeobrereros convertía al Partido en cómplice de éstos y de la degeneración de la clase obrera. En el cumplimiento de deber tan fundamental no se admitía masedumbre al Partido y tal tarea, de principios, estaba por encima de otros intereses tácticos y no era asunto de unidad sindical. Las orientaciones no dejaban lugar a ninguna duda ni ambigüedad. El lenguaje era preciso, carente de circunloquios y vaguedades, que se prestan más a ocultar las intenciones que a expresar unos propósitos que han de convertirse en guía de las masas irredentas.

Tomemos atenta nota de cómo cambiaron estas directrices en la Conferencia de La Mesa de los Santos:

“Y esta correlación de fuerzas tan desfavorable [después del rompimiento con el grupo de Marcelo Torres] para el Partido en el movimiento obrero se agudizaba mucho más al ver que las tendencias predominantes eran de tipo conciliacionista de clase. Unas direcciones obreras y sindicales invadidas de oportunismo. En algunos casos de neto derechismo. Un proceso que ha ido lanzando al movimiento obrero en una especie de prostración, ante unas políticas, que como las del neoliberalismo habían adquirido cierta dinámica”.

Después de reconocer el papel nocivo de estas tendencias, en vez de llamar a combatir las:

“El Partido tiene dos terrenos de actividad. Uno es el terreno de la confrontación con el imperialismo y con los gobiernos proimperialistas que imperan acá (...) El otro terreno, está dentro de las fuerzas que de una u otra forma se diferencian del imperialismo o del gobierno o se le oponen. Es una lucha ligada pero que tiene los dos aspectos diferenciados. Este segundo aspecto, el tratamiento con diferentes fuerzas que en diversa medida tienen diferencias con el gobierno, con el imperialismo y con esas políticas, pero que atraviesan etapas de franco oportunismo en las peleas que se deben librar, eso digo, nos presenta un terreno constante de actuar, esas fuerzas son inconsecuentes por ignorancia, o por confusión o por oportunismo. Para que la primera tarea pueda tener algún avance se necesita **arreglar la segunda tarea**”.⁷⁹

Ya no habla de que “el imperialismo se ha ganado o ha comprado una capa de dirigentes sindicales para sacar adelante sus intereses”. No señala a los traidores, ahora son gente que se diferencia del imperialismo y del gobierno pero que atraviesa “etapas de franco oportunismo”, quizás “por ignorancia o confusión”. Ya no se trata de combatirlos, sino de “arreglar la segunda tarea”.⁸⁰

Este cambio en la caracterización se presta para formular una política de unidad con aquellos a quienes antes se atacaba:

“Porque es que allí en este sector de los trabajadores aparece con toda su evidencia la necesidad de aplicar esos criterios generales de Nueva Democracia. En general, las contradicciones dentro del movimiento obrero son contradicciones en el seno del pueblo. Eso no quita que haya personas u organizaciones que se pongan en una posición antagónica en contra de los intereses, tanto de la clase obrera como de la nación (...) Dentro de la labor general de unificación de fuerzas antiimperialistas y patrióticas, de fuerzas democráticas, necesitamos que esos mismos fenómenos ocurran dentro del movimiento obrero (...) Un criterio correcto de democracia con estos fines de unificación reside en estas tareas”.⁸¹

Ahora los que han postrado al movimiento obrero ya no son agentes enemigos, se les considera contradictores “en el seno de pueblo”. Como en *Cambalache*, el conocidísimo tango de Santos Discépolo, “¡hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor!” Claro, hay traidores. Por eso, el camarada Valencia, en el lenguaje harto evasivo que lo va caracterizando, sostiene que eso “no

⁷⁹ Conferencia Nacional de La Mesa de los Santos (20-24 de enero de 2003), informe del Comité Ejecutivo Central del MOIR, presentado por Héctor Valencia, Secretario General.

⁸⁰ Ibidem

quita” que algunos se pongan en una posición antagónica con los intereses de la nación y de la clase obrera. ¿Quiénes? Valencia resbala: “personas u organizaciones”. No dice cuáles. El “deber” de denunciar a los vendeobreros se ha transformado en vaguedad. ¿De dónde acá los criterios generales de Nueva Democracia consisten en contradicciones secundarias las existentes con una tendencia “predominante de tipo conciliacionista de clase”, encarnada en unas “direcciones obreras y sindicales invadidas de oportunismo”, “de neto derechismo”, que lanzan a la postración al proletariado?

Así mismo, enumera los distintos asuntos sin diferenciar su importancia:

“Hay un problema en el movimiento obrero a primera vista y protuberante, es la dispersión, el debilitamiento de su funcionamiento, ante eso el Partido, debe centrar esfuerzos en que el movimiento sindical se fortalezca, se amplíe. Porque ha venido una especie de marchitamiento, en cuanto a la membresía en los sindicatos, junto a eso unas tácticas y unas luchas sindicales romas, que tiene diferentes causas: el oportunismo claro, el burocratismo, el gremialismo, manifestaciones aberrantes de corrupción, no únicamente política, sino corrupción monda y lironda que tiene que ver con los recursos materiales de los sindicatos. Aparte de las embestidas del enemigo y el desprestigio de las fracciones sindicales, algunas direcciones ayudan a ese desprestigio antes que los ataques del enemigo (...) Nosotros debemos y podemos aportar al cambio de esa situación y de esos vicios. [Para] la erradicación de esos vicios necesitamos un ambiente democrático en los sindicatos. Buscar un terreno en que eso no sea una pelea de perros (...)”.⁸²

Reemplaza el resuelto llamado a no ser mansos por el temeroso de evitar peleas de perros. ¿Denunciar a los traidores es una pelea de perros? ¿Lo fue el combate contra Tulio Cuevas y Raquel Mercado, o contra Obregón? Valencia continúa:

“Hemos aplicado una primera cosa que tiene que ver con las condiciones mínimas para emprender esa labor, y es evitar el aislamiento. Elevar una crítica contra el oportunismo sindical que lo deje meramente como una cuestión mecánica, lleva al aislamiento sindical del Partido, y será tarea fácil, por no decir irresponsable políticamente. Son suficientes las conductas inconsecuentes, a veces realmente traidoras de diversas direcciones sindicales. En cuanto a motivos y razones no nos faltan, y menos ahora; o mejor, abundan. Es muy fácil responder a esto con un radicalismo. Denunciemos radicalmente, en términos fuertes, desnudemos ante las bases todos estos vicios, cumplamos nuestro deber de pelear contra el oportunismo sindical y político. Si eso se hace mecánicamente nos aislamos”.⁸³

Es difícil encontrar en la literatura política una manifestación de mayor inconsecuencia, de irresolución. Valencia avanza, patina, retrocede. Sucumbe en su afán de hacer la crítica evitándola.

“¿Cómo hacer esa denuncia, esa crítica? Tiene que ser un proceso, porque allí no está envuelta únicamente nuestra razón, sino un problema de correlación de fuerzas, sin lo cual no hay táctica correcta. Recoger criterios que son viejos en el Partido, viejos en el movimiento comunista, nos apoyamos en los consecuentes y avanzados, para que jueguen el papel principal. Nos ayudamos con los medios y aislamos a los recalcitrantes. Esto es un proceso camaradas, no es salir como locas con escopeta. Son contradicciones en el seno del pueblo, no únicamente en el movimiento obrero y ¿ese pueblo está ganado para la pelea antiimperialista? No lo está, ese es el problema, y no lo está el movimiento obrero, por eso no cabe que nos equivoquemos en el tratamiento de las contradicciones. Resolver el problema estableciendo un antagonismo ante las diferentes inconsecuencias es un grave error. Son contradicciones no antagónicas, que pueden

⁸¹ Ibidem

⁸² Ibidem

⁸³ Ibidem

convertirse en antagónicas si no las tratamos bien (...) No es un no aislamiento general; es ahora, ahora que somos una ínfima minoría dentro del movimiento obrero y la sociedad (...) Lo primero que el Partido debe saber es su fuerza en la sociedad, que es ampliamente desfavorable. Si no se entiende eso, el Partido, o el aislamiento de que hablo, no solamente nos lleva a no avanzar, sino que nos barren”.⁸⁴

Sostener que la denuncia de una traición, o de cualquier atropello, es un proceso, es algo completamente absurdo; lo que busca una denuncia sería es coger a los ladrones con las manos en la masa y la prontitud, la precisión, la oportunidad constituyen sus características primordiales. Recordemos, una vez más, que el Secretario General, en la Conferencia Obrera de 1995, consideraba un deber señalar a los traidores y afirmaba que no cumplirlo nos convertiría en cómplices de la degeneración de la clase obrera. En aquel entonces no lo condicionaba a no hacerlo mecánicamente, ni al proceso, ni a la correlación de fuerzas, por el contrario, sostuvo que “cuestiones que atañen a ese deber, camaradas, están por encima de otros intereses tácticos”. ¿Será a sus propias recomendaciones de esa época a las que ahora llama “salir como locas con escopeta”? Nos asaltan otros interrogantes: ¿Si estamos en minoría no desnudamos a los traidores? ¿Qué es lo que establece el antagonismo con los esquiroles? ¿Nuestra crítica o su comportamiento como tales?

Ahora bien, es muy claro que el Partido no debe atacar indiscriminadamente todas las posiciones que considere equivocadas, sino que, con paciencia y de manera persuasiva, ha de apoyarse en los trabajadores más avanzados, acercar a los intermedios y aislar a los recalcitrantes. Esto no es nuevo. Precisamente para desarrollar esta conducta política revolucionaria, se necesita especificar quiénes representan las posiciones recalcitrantes al servicio del enemigo, caracterizar y desenmascarar sus procedimientos para que no se camuflen entre otros trabajadores que tengan puntos de vista erróneos pero que no se hayan vendido. Esa caracterización es la que Héctor Valencia no hace ahora.

¿Cómo logra el Partido cambiar la correlación interna en las centrales y en los sindicatos? Pues no se trata de salirse de ellos, esa no es la discusión. Para Mosquera un requisito indispensable era **combatir y aislar** al oportunismo y a los traidores; para Valencia es “no aislarnos”, o sea, que si combatimos por sitiar a las camarillas ¡quienes terminamos sitiados somos nosotros! Salta a la vista que la preocupación de Mosquera consistía en ligarse a las masas y desterrar a las cúpulas amarillas. Mientras que para Valencia es no malquistarse con las burocracias. Lo que aparece en la Conferencia como una contradicción entre el Comité Ejecutivo y quienes hemos sostenido posiciones divergentes en el regional de Cundinamarca y en *Tribuna Roja*, en realidad, lo es con el pasado del MOIR y con la línea trazada por Francisco Mosquera.

Continuemos con los planteamientos de Valencia en La Mesa de los Santos:

“Si la cuestión en discusión es cosa de principios, y no queda margen para que esos principios no se rompan, **puede aparecer** la necesidad del rompimiento, es más, el rompimiento **puede ser** la solución. Pero cuando digo proceso, digo es que hay que agotar todas las instancias del proceso. Si fue que se agotaron las instancias de persuadir, de voltear la correlación (...) Si aparece todo eso y no hay solución, **puede que** lo que convenga a los intereses de los trabajadores sea el rompimiento. **Pero yo diría** que dentro de la etapa, esa situación debería ser la excepcional”.⁸⁵

Si aterrizamos esto en la vida real, encontramos que, según el Ejecutivo, el rompimiento no ha *podido* ser la solución. Los Cuevas y los Mercado de hoy entregaron la convención de los trabajadores

⁸⁴ Ibidem

⁸⁵ Ibidem

del ISS; ferieron la convención y mucho más en Paz del Río; alcahuetearon las reformas laboral, pensional, tributaria; en la educación, el Psoc y la UD respaldaron la aprobación de la Ley 715 y el Plan de Desarrollo de Uribe; en el sector eléctrico, Sintraelec pactó envilecer las convenciones, cooperó con la privatización y se dedicó a la puja por una porción ridícula de las acciones; en Telecom, la cúpula del sindicato entregó el interés nacional al consentir que quedara en manos de los tribunales internacionales de arbitramento la decisión sobre los contratos de *join venture*. Si estas traiciones, para nombrar solo algunas, no colocan las cosas en el terreno de los principios, si no dan para que se antagonicen las contradicciones, ¿qué los puede antagonizar? ¿Se puede llegar a extremos de mayor claudicación frente a los intereses nacionales y obreros? ¿Son estos los criterios que se nos pide que apliquemos en nuestro trabajo en toda la sociedad?

Se dirá que se vive el proceso de la táctica, que al parecer significa que denunciamos poco a poco a los traidores, sin correr el riesgo de aislarnos, con un procedimiento bien democrático de nuestra parte y que garantice que los esquirolas nos den democracia para debatir con ellos. Por tanto, primero hay que persuadirlos, luego, criticarlos y, si después de todos los esfuerzos, a la enésima villanía, no los convencemos, romper. ¡Esto sería algo excepcional en la situación de hoy!, aunque abunde la defección; pero, eso sí, enseguida del rompimiento, hay que llamarlos de nuevo a que encabecen “las audacias proletarias” y a que amplíen el frente único antiimperialista. ¿Cuándo permitirá esta “táctica proceso” hacerle la primera reconvencción persuasiva a Carlos Rodríguez?

Cambio tan brusco de la política partidaria se lleva a cabo sin ajustar cuentas con los lineamientos anteriores. ¿Qué había sucedido? ¿Fue incorrecto, fue mecánico, fue sectario, fue antiunitario atacar a los traidores? ¿Fue correcto en el pasado y ya no lo es? ¿Por qué? ¿Qué cambió entre la Conferencia Nacional Obrera y la de La Mesa de los Santos, para que ahora la unificación del movimiento obrero sea una tarea que no requiere el ataque a los felones, sino la colaboración con ellos? ¿Había sufrido alguna mutación la corriente oportunista? ¿Todavía son traidores los traidores? Mirados los hechos era claro que tal corriente arreciaba antes que menguar. ¿Qué cambios en la situación nacional o internacional ameritaban un viraje tan radical? Aquí tampoco aparecen circunstancias que indiquen una transformación substancial de la etapa de *apertura*, caracterizada por Mosquera. Nada de esto se explica porque no se trata de un viraje franco; estamos ante un deslizamiento. Se simula mantener la misma política mientras se la altera. Lo cierto es que luego de que la fracción marcelista abandonara sus filas, —cuando Valencia anunció que estábamos “abocados a la lucha en el movimiento obrero”— y que íbamos “a librarla”, el Partido optó por dejarse de “radicalismos”, que al parecer desentonaban y los cuales ya no tenía sentido esgrimir.

Vivir para ver. El Secretario General del MOIR defiende, ni más ni menos, que la antigua política del Partido Comunista de unidad con los esquirolas, que combatiera tan reciamente Francisco Mosquera. Aboga, ni más ni menos, que por la línea de Marcelo Torres de conformar el gran frente único sin una base de principios, que vapuleara con tanta razón el mismo Valencia. La engañifa del Frente Social y político de acabar con la lógica de amigo-enemigo toma cuerpo en el Ejecutivo del MOIR, que ahora considera que no hay contradicciones antagónicas con los vendeobreristas.

Señalemos a vuelapluma que en La Mesa de los Santos, Valencia aleccionó sobre la necesidad de la lucha ideológica y expresó que sin ella el Partido se asimila a una cometa sin cola. Pero, mientras que Carlos Rodríguez y el FSP divulgan tesis que llevan confusión y abatimiento a la clase obrera, la dirección del MOIR no ha hecho ninguna crítica sistemática, concienzuda, a estas concepciones. Vivimos un periodo en el cual la discusión teórica tiene una importancia ingente. La plutocracia

financiera internacional se ha dedicado a difundir a través de la enseñanza, de los medios masivos de comunicación y de toda clase de libros, conferencias y publicaciones unas ideas que procuran perpetuar la esclavitud. Sin rebatir estos infundios no es posible agrupar a las fuerzas que necesitan la emancipación nacional; sacrificar la exposición del pensamiento revolucionario en busca de acuerdos no es un modo aconsejable de proceder. El pragmatismo en boga pretende desconocer que la teoría, el pensamiento, son asuntos de gran importancia práctica. En esta materia ya hemos esbozado, en distintas ocasiones, las abismales diferencias que distancian al Comité Ejecutivo de los firmantes de esta carta. A ellas nos referiremos con mayor detalle en otra oportunidad.

Aparte de los yerros descritos, el Secretario General mostró su incompreensión sobre los retos que habría de enfrentar el movimiento obrero en los meses siguientes a la mencionada reunión partidaria de La Mesa de los Santos:

“Comenzamos la gran batalla contra las políticas de Uribe Vélez y del imperialismo. Vamos a darlas todas, una por una, (...) La correlación de fuerzas es desfavorable entre el MOIR y el gobierno, por supuesto. Lo que necesitamos hacer en la batalla contra el referendo es acumular fuerzas suficientes para que pueda ser exitosa. Estamos en acumulación de fuerzas. Trataremos de no dar batallas decisivas. Solamente las obligadas. Si podemos aplazar una batalla para ganar un poco más de fuerza, lo haremos. No vamos a salir como una especie de locos. Son batallas programadas. Una recomendación sobre el manejo táctico de estas batallas contra Uribe Vélez. Trataremos de tener fuerza suficiente para ganar cada batalla. Batalla donde la correlación de fuerzas, de entrada, nos anuncie derrota, no la damos. Es una suma de pequeñas batallas en busca de una batalla más grande. Vamos a pelear con razón, con fuerza y sin sobrepasarnos”.⁸⁶

Claro que el proletariado puede retroceder y evitar luchas en las cuales vaya a sufrir derrotas. Eludirlas, preservar y acumular fuerzas para luego salir al combate en mejores condiciones no sólo es legítimo sino necesario en numerosas oportunidades. Pero la situación que se vive, en general, no le permite al movimiento obrero colombiano esa posibilidad. La gran mayoría de las veces, el gobierno de Álvaro Uribe ha impuesto condiciones en las cuales los trabajadores tenían que luchar o enfrentar la liquidación de sus contingentes. El dictatorial jefe de Estado ha procedido a cerrar o a escindir empresas públicas, con lo cual ha eliminado sindicatos enteros; también ha destruido las organizaciones a través de la llamada flexibilidad laboral. Muchos asalariados viven el abatimiento y la desmoralización a causa de que padecen, inermes, por el despojo de sus ya escasos derechos.

Con cada enfrentamiento que se esquiva, se devasta el movimiento obrero; hoy, hacerle el quite a la lucha se ha convertido en sinónimo de desertar y no de salvaguardar y robustecer los destacamentos combativos. En este período, la única opción para mantener y aumentar las huestes proletarias consiste en organizarlas, animarlas y vencer el temor para oponer resistencia al atropello. ¿Alguien puede pensar que el no promover la huelga en Telecom, o en el Seguro Social, cuando se arremetió contra ellas, ha sumado fuerzas? ¿Soñaba el Secretario General del MOIR que podía escurrírsele el bulto a la pelea en Ecopetrol y que la USO saldría indemne o robustecida? ¿Adónde quedaron las enseñanzas de la Caja Agraria?

El cometer errores es algo de lo cual nadie puede escapar, lo importante es mantener la fidelidad a la causa y, en su beneficio, esforzarse por descubrir y enmendar las equivocaciones. Para ese propósito, la modestia es la mejor consejera, pues se continúa aprendiendo en tanto que se acepte que hay muchas cosas que se ignoran.

⁸⁶ Ibidem

Es preocupante que el Secretario General del Partido añada presunción a los desaciertos. En la ya muy citada Conferencia afirmó:

“Eso nos ha llevado a la actual situación. En que hemos tenido que elevar nuestro conocimiento político, nuestra comprensión política, nuestro nivel ideológico. Y que junto a eso, hayamos tenido que adquirir **un gran conocimiento de la táctica** (...) Damos por hecho que en la situación de la **lucha de clases nacional e internacional tenemos una comprensión meridiana**”.⁸⁷

Y ya en la Conferencia Nacional del Partido, en Suesca, citando sin ton ni son a Mao, había alardeado:

“**Cualquiera que dude de nuestra capacidad de dirección revolucionaria en la sociedad colombiana caerá en el pantano del oportunismo**”.⁸⁸

No olvidemos que la autoalabanza y la complacencia son poderosas enemigas del avance. Por ese camino, el dirigente político revolucionario termina convertido en sumo sacerdote.

Camaradas del Comité Ejecutivo Central, consideramos que la hora demanda del Partido mayores esfuerzos para instruir y organizar a la clase obrera; es indispensable formar círculos y células en los lugares y sectores productivos de mayor concentración, exista o no sindicato, teniendo en cuenta que la “flexibilidad laboral” exige esmerarse en proteger a quienes participen en estas actividades. En las preocupaciones partidarias pesa demasiado el no aislarse de las juntas directivas de los sindicatos y de las centrales y alcanzar cargos en ellas —a lo cual no le desconocemos importancia— y muy poco las angustias de las masas laboriosas. La vanguardia obrera logrará superar las dificultades producto de la ofensiva enemiga y de los contemporizadores fundamentalmente a partir de un trabajo de base. Así, los proletarios, quienes están recibiendo los golpes más rudos de la *apertura*, se pondrán al frente de la lucha antiimperialista. Todo el auge globalizador descansa en la miseria de los asalariados pues las ganancias del capital se acrecen sobre la base de pauperizarlos. Aquella máxima de Marx y Engels de que *los proletarios no tienen nada que perder excepto sus cadenas*, es ahora más verdadera que nunca. Por ello, la clase obrera es no sólo la cabeza de la lucha nacional y democrática, sino también la garante del porvenir de la causa revolucionaria; el proletariado combate al imperialismo y a la burguesía vendepatria no con el anhelo de volver a modos de producción pretéritos, sino para conducir en últimas a la sociedad por la senda socialista, única salida a la crisis mundial del capitalismo. Que nadie se engañe: el que hoy las masas obreras sean presa de la derrota y se hallen confusas no significa que no tengan un papel histórico portentoso en la transformación revolucionaria de la sociedad. El campesinado, las capas medias y la burguesía nacional son baluartes del progreso pero no pueden sustituir al obrerismo.

Respetados compañeros, esperamos que el presente escrito contribuya al desarrollo de un debate sano y franco que aporte un grano de arena al esclarecimiento de las tareas que afrontamos. Hemos dedicado esta misiva a tratar exclusivamente las materias urgentes relacionadas con el movimiento sindical, pero confiamos en que habrá oportunidades para ventilar otros asuntos de importancia en los cuales asoman diferencias considerables.

⁸⁷ Ibidem

⁸⁸ Conferencia Nacional de Suesca (19-21 de enero de 2001), informe del Comité Ejecutivo Central del MOIR, presentado por Héctor Valencia, Secretario General.

Fraternalmente:

Martha Bermúdez

Francisco Cabrera Gutiérrez

Vladimir Castañeda Rabelo

Alfonso Hernández Forero

Alejandro Torres Bustamante